

Pérez-Llorca

ANUARIO **2024** YEAR IN REVIEW

Penal Económico e Investigaciones
White Collar Crime and Investigations

2024

Índice

1. Introducción	3
2. Novedades legislativas	6
3. Novedades jurisprudenciales	11
4. Publicaciones de organismos oficiales	28
5. Conocimiento Jurídico	29
5.1 Notas jurídicas enviadas a cliente	29
5.2 Artículos Doctrinales	29
5.3 Menciones en Prensa	29
5.4 Libros	30
5.5 Actividad docente	30
5.6 Eventos	31
6. Reconocimientos	34
6.1 Despacho	34
6.2 Abogados	34
7. Nuestro equipo	35

Index

1. Introduction	3
2. Legislative developments	6
3. Case law developments	11
4. Publications by official bodies	28
5. Legal Knowledge	29
5.1 Legal Briefings sent to clients	29
5.2 Academic Articles	29
5.3 In the Press	29
5.4 Books	30
5.5 Academic Activities	30
5.6 Events	31
6. Recognition	34
6.1 Firm	34
6.2 Lawyers	34
7. Our Team	35

1. Introducción

El año 2024 ha estado marcado por relevantes acontecimientos mediáticos en el ámbito del derecho penal en España, tanto en el plano legislativo como en el judicial. A nivel normativo, una de las modificaciones más relevantes ha sido la reforma del artículo 130.1.4 del Código Penal, que ha introducido la amnistía como una nueva causa de extinción de la responsabilidad criminal. Este cambio ha sido objeto de un intenso debate jurídico y político, generando un gran número de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal Constitucional, incluyendo la elevada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La evolución de estos procedimientos marcará sin duda la agenda penal en los próximos meses, a la espera de resoluciones que clarifiquen su aplicación y encaje dentro del marco constitucional.

Otro de los ejes fundamentales del final del año 2024 y que marcará este año será la implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, orientada a mejorar la eficiencia del Sistema de Justicia. La digitalización de los procedimientos y la agilización de la tramitación procesal en el ámbito penal buscan convertirse en pilares fundamentales de esta reforma, cuyo impacto real se podrá medir en los próximos meses conforme se consolide su aplicación en los tribunales. Sin embargo, los esfuerzos por mejorar la respuesta del sistema judicial penal han chocado con la falta de consenso en torno a nuevas reformas del Código Penal. Los proyectos legislativos presentados han evidenciado una profunda fragmentación política, lo que dificulta la aprobación de cambios estructurales con el necesario respaldo parlamentario.

En paralelo, el año 2024 también ha estado marcado por la consolidación de la Ley 2/2023 en materia de protección del informante. Si bien ya se ha aprobado su Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, persiste la ausencia de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar su plena aplicación. En este contexto, se espera que 2025 sea el año en el que vea la luz la Autoridad Independiente de Protección del Informante, órgano encargado de velar por el cumplimiento de sus principales mandatos: proteger a los denunciantes, gestionar el canal externo e imponer sanciones a los infractores. La comunidad jurídica observará con gran interés su implementación y el papel que jugará en la lucha contra la corrupción, así como el impacto real de su funcionamiento en la práctica. Todos los operadores jurídicos están a la espera de conocer las primeras resoluciones y sanciones que se dicten, ya que estas marcarán la pauta sobre la forma en que se aplicarán muchas de las disposiciones de la Ley 2/2023 y aclararán aspectos clave de su interpretación y alcance.

En los últimos años, diversas Comunidades Autónomas han dado pasos firmes en la consolidación de una cultura de protección del informante y defensa de los intereses públicos, reflejada en la creación de Agencias Antifraude y de Protección del Informante en varias regiones. Estas iniciativas evidencian un compromiso creciente con la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, pero hasta que la Autoridad Independiente de Protección del Informante no esté plenamente operativa y dotada de los recursos necesarios, será imposible una evolución coordinada y homogénea del sistema. La falta de armonización

1. Introduction

2024 has been marked by a number of significant events in Spanish criminal law, both at the legislative and judicial levels. At the regulatory level, one of the most significant changes has been the reform of Article 130.1.4 of the Criminal Code, which has introduced amnesty as a new ground for extinguishing criminal liability. This change has been the subject of intense legal and political debate, generating a large number of appeals and questions of unconstitutionality presented before the Constitutional Court, including one raised by the Second Chamber of the Supreme Court. The evolution of these procedural changes will undoubtedly set the criminal agenda in the coming months while we await judgments that clarify their application and fit within the constitutional framework.

Another of the fundamental issues that defined the end of 2024, and which will set the tone for 2025 will be the implementation of Organic Law 1/2025 on measures for the efficiency of the Public Service of Justice, aimed at improving the efficiency of the justice system. The digitisation of proceedings and the streamlining of criminal litigation are intended to become fundamental pillars of this reform, the real impact of which can be measured in the coming months as its application in the courts is consolidated. However, efforts to improve the functioning of the criminal justice system have come up against a lack of consensus on further reforms to the Criminal Code. Draft legislation has shown evidence of deep political fragmentation, making it difficult to pass structural changes with the necessary parliamentary backing.

In parallel, 2024 was also noteworthy for the consolidation of Law 2/2023 on the protection of whistleblowers. Although the Statute of the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers has already been approved, the necessary material and human resources to guarantee its full implementation are still absent. In this context, 2025 is expected to be the year in which the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers, a body responsible for ensuring compliance with its main mandates: protecting whistleblowers, managing the external channel and imposing sanctions on offenders, will be established. The legal community will observe its implementation and the role it will play in the fight against corruption with great interest, as well as the real impact of its functioning in practice. All legal practitioners are waiting for the first rulings and sanctions to be issued, as these will set the tone for how many of the provisions of Law 2/2023 will be applied and clarify key aspects of its interpretation and scope.

In recent years, several Autonomous Communities have moved decisively towards the consolidation of a culture of whistleblower protection and the defence of the public interest, as reflected in the creation of anti-fraud and whistleblower protection agencies in several regions. These initiatives demonstrate a growing commitment to transparency and the strengthening of reporting mechanisms, but until the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers is fully operational and equipped with the necessary resources, a coordinated and consistent evolution of the system will be impossible. The absence of harmonised regulations

normativa y de un marco común de actuación sigue siendo un obstáculo para garantizar una protección eficaz del denunciante y una lucha integral contra la corrupción, lo que hace imprescindible una coordinación institucional real que asegure la aplicación efectiva de la Ley 2/2023 en todo el territorio nacional.

Desde una perspectiva internacional, la Directiva (UE) 2024/1203, publicada el 30 de abril de 2024, refuerza la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, sustituyendo las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE. Su transposición, antes del 21 de mayo de 2026, plantea un reto significativo para el derecho penal, al ampliar la responsabilidad penal de empresas y directivos en delitos ambientales. La norma introduce penas de hasta diez años de prisión para personas físicas y sanciones económicas severas para personas jurídicas, incluyendo multas de hasta el 5% del volumen de negocio. Además, prevé la jurisdicción extraterritorial en determinados casos, lo que podría intensificar la persecución penal transfronteriza. Su implementación obligará a las empresas a fortalecer sus programas de *compliance* penal, ante un marco normativo más estricto en materia ambiental.

También se ha aprobado la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta normativa impone a determinadas empresas la obligación de identificar, prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos de su actividad en derechos humanos y medio ambiente, incluyendo la supervisión de sus filiales y socios comerciales. Su transposición, que deberá completarse en un plazo de dos años, introduce un régimen sancionador y de responsabilidad civil por daños, con sanciones de hasta el 5% del volumen de negocios mundial neto de las empresas infractoras. Si bien su enfoque es eminentemente administrativo y civil, su impacto en el derecho penal puede derivar en nuevas figuras delictivas o agravantes en casos de omisión de controles, especialmente en sectores de alto riesgo. Asimismo, la Directiva refuerza la cooperación internacional, facilitando la persecución de empresas y directivos por infracciones transnacionales. En este contexto, las empresas deberán fortalecer sus programas de *compliance*, ya que la falta de diligencia en la prevención de abusos podría traducirse en sanciones severas e, incluso, responsabilidad penal en casos graves.

En el plano judicial, el año ha estado marcado por una serie de resoluciones y procedimientos penales de gran repercusión mediática. Diversos casos han puesto en el centro del debate cuestiones clave como la respuesta política e institucional ante las agresiones sexuales, la corrupción en la gestión de fondos públicos y el posible tráfico de influencias en el ámbito gubernamental. Estos procedimientos han reavivado la discusión sobre la transparencia y la integridad en la esfera pública, en un contexto en el que la lucha contra la corrupción continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Por otro lado, uno de los grandes temas pendientes en el ámbito penal sigue siendo la falta de pronunciamientos definitivos del Tribunal Supremo sobre los programas de cumplimiento normativo. La comunidad jurídica continúa esperando resoluciones que determinen con precisión cómo deben articularse estos programas, con qué elementos debe contarse y cómo afecta ello a su

and a common framework for action continues to be an obstacle to guaranteeing effective whistleblower protection and a comprehensive fight against corruption, making real institutional coordination essential to ensure the effective application of Law 2/2023 throughout the country.

From an international perspective, Directive (EU) 2024/1203, which was published on 30 April 2024, and which replaces Directives 2008/99/EC and 2009/123/EC, strengthens the protection of the environment through the use of criminal sanctions. Its transposition, before 21 May 2026, poses a significant challenge for criminal law, as it broadens the criminal liability of companies and executives for environmental crimes. The Directive introduces penalties of up to ten years imprisonment for natural persons and severe financial penalties for legal persons, including fines of up to 5% of turnover. Furthermore, it provides for extraterritorial jurisdiction in certain cases, which could lead to more cross-border criminal prosecutions. Its implementation will force companies to strengthen their criminal compliance programmes in the face of a stricter regulatory framework regarding environmental matters.

Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence, which was published in the Official Journal of the European Union, has also been approved. This Directive obliges certain companies to identify, prevent, mitigate and remedy the negative impacts of their activity on human rights and the environment, including the supervision of their subsidiaries and business partners. Its transposition, which should be completed within two years, introduces a system of sanctions and civil liability for damage, with penalties of up to 5% of the worldwide net turnover of offending companies. Although its focus is eminently administrative and civil, its impact on criminal law may result in new offences or aggravating circumstances in cases involving a failure to carry out controls, especially in high-risk sectors. The Directive also strengthens international cooperation, facilitating the prosecution of companies and executives for transnational offences. In this context, companies will have to strengthen their compliance programmes, as the failure to act diligently to prevent abuses could result in severe sanctions and even criminal liability in serious cases.

From a judicial point of view, 2024 was marked by a series of high-profile criminal judgments and proceedings. Several cases have brought key issues to the centre of the debate, such as the political and institutional response to sexual assault, corruption in the management of public funds and possible influence peddling in the governmental sphere. These proceedings have rekindled the discussion on transparency and integrity in the public sphere, at a time when the fight against corruption continues to be one of the main concerns of citizens.

Furthermore, one of the major issues that remains unresolved in criminal law is the lack of definitive Supreme Court judgments on regulatory compliance programmes. The legal community is still waiting for judgments that determine precisely how these programmes should be structured, what elements they should include and how these factors may affect their implementation, to the point where they can be considered an exemption or

implementación, hasta el punto de que pueda considerarse una causa eximente o meramente atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, 2025 será un año en el que se seguirá esperando pronunciamientos clave para definir el alcance y la efectividad de estos mecanismos para las personas jurídicas dentro del marco penal español.

Finalmente, en el ámbito de las medidas restrictivas de la Unión Europea (“UE”), la política sancionadora dio un paso decisivo con la adopción de tres nuevos paquetes de sanciones. El 13^o paquete, implementado el 23 de febrero de 2024, se centró en ampliar y reforzar las restricciones ya existentes. Posteriormente, el 14^o paquete, adoptado el 24 de junio de 2024, introdujo sanciones específicas dirigidas a combatir las violaciones de derechos humanos y la represión interna en Rusia, estableciendo nuevos mecanismos de control y supervisión. Finalmente, el 15^o paquete, puesto en marcha el 16 de diciembre de 2024, se orientó a contrarrestar las actividades desestabilizadoras y los ataques híbridos que afectan a Europa y terceros países, reforzando los procedimientos para prevenir la elusión de medidas restrictivas.

Además, la publicación de la Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y sanciones por la vulneración de medidas restrictivas de la UE, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2018/1673, obligará a los Estados miembros a tipificar como delito la infracción y/o elusión de dichas medidas a partir de mayo de 2025. Esta normativa refuerza la uniformidad en su aplicación a nivel comunitario y establece un marco sancionador más homogéneo en la lucha contra la evasión de restricciones.

En conclusión, el año 2024 ha mostrado un contraste marcado: por un lado, no ha sido testigo de grandes modificaciones en el Código Penal, en gran parte debido a la falta de consenso en el arco parlamentario; por otro, ha habido avances significativos en la política sancionadora de la UE. A pesar de las propuestas difundidas por el Gobierno, estas no han logrado calar ni entre la opinión pública, ni entre los operadores jurídicos, ni en el resto de grupos parlamentarios, lo que ha frenado cualquier avance significativo en la reforma penal.

De cara a 2025, se espera que el debate en torno a la reforma penal continúe y que, en caso de alcanzarse un mayor consenso, se retome la implementación de medidas que puedan configurar el futuro del derecho penal en España. En cuanto a la política sancionadora de la UE, la transposición de la directiva sobre la criminalización de la violación de medidas restrictivas y el refuerzo de los mecanismos contra su elusión generarán un marco normativo más estricto y uniforme. Asimismo, se prevé la adopción de nuevas medidas en sectores clave —posiblemente con mayores controles en el comercio y restricciones adicionales a las operaciones financieras vinculadas a Rusia—, reforzando la cooperación internacional.

Los operadores jurídicos aguardan con especial interés que cualquier reforma normativa que finalmente prospere lo haga con el necesario respaldo institucional, garantizando así una mayor seguridad jurídica y estabilidad en el sistema penal.

merely a mitigating factor in the criminal liability of legal persons. Accordingly, 2025 will be a year in which we will continue to await key decisions to define the scope and effectiveness of these mechanisms for legal persons within the Spanish criminal framework.

Finally, in the context of the European Union’s (“EU”) restrictive measures, the EU’s sanctions policy took a decisive step forward with the adoption of three new sanctions packages. The 13th package, implemented on 23 February 2024, focused on expanding and strengthening existing restrictions. Subsequently, the 14th package, adopted on 24 June 2024, introduced targeted sanctions aimed at combating human rights violations and internal repression in Russia by establishing new control and monitoring mechanisms. Finally, the 15th package, launched on 16 December 2024, was aimed at countering destabilising activities and hybrid attacks against Europe and third countries, strengthening procedures to prevent the circumvention of restrictive measures.

In addition, the publication of Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673, will oblige Member States to criminalise the violation and/or circumvention of such measures from May 2025. This legislation promotes standardisation in its application at Community level and establishes a more homogeneous framework of penalties in the fight against the evasion of restrictions.

In conclusion, 2024 has been a year of stark contrasts: on one hand, we have not seen major changes to the Criminal Code, largely due to the lack of consensus in parliament; on the other hand, there has been significant progress in the EU’s sanctioning policy. Despite the proposals put forward by the Government, they have failed to make an impact on public opinion, legal professionals or other parliamentary groups, which has stalled any significant progress in penal reform.

Looking ahead to 2025, the debate on penal reform is expected to continue and, if a greater consensus is reached, the implementation of measures that may shape the future of criminal law in Spain will be resumed. Concerning the EU sanctions policy, the transposition of the directive on the criminalisation of the violation of restrictive measures and the reinforcement of mechanisms against their circumvention will help to create a stricter and more uniform regulatory framework. Similarly, the adoption of new measures in key sectors is anticipated — possibly with greater controls on trade and additional restrictions on financial transactions linked to Russia — reinforcing international cooperation.

Legal practitioners are particularly keen for any regulatory reform that finally goes ahead to have the necessary institutional backing, thus guaranteeing greater legal certainty and stability in the criminal justice system.

2. Novedades legislativas

Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, tiene como objetivo modernizar y agilizar el sistema judicial en España mediante una serie de reformas estructurales y procesales. Esta normativa busca mejorar la organización de los órganos judiciales, reducir la duración de los procedimientos y garantizar una mayor especialización en la resolución de los conflictos. En el ámbito penal, la ley introduce cambios relevantes que afectan tanto a la fase de instrucción como a la celebración de juicios y la ejecución de sentencias, con especial énfasis en la protección de víctimas y la mejora de la respuesta judicial ante determinados delitos. A continuación, se detallan las principales novedades que esta reforma incorpora en el ámbito penal.

- » **Creación de los Tribunales de Instancia.** La reforma introduce la sustitución de los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia en cada partido judicial. Con esta medida, se pretende mejorar la especialización y optimizar la gestión de los procedimientos penales al agruparlos en secciones específicas dentro de estos nuevos órganos judiciales.
- » **Audiencia Preliminar en el Procedimiento Abreviado.** Se incorpora una audiencia preliminar en el procedimiento abreviado, reemplazando la tradicional fase de cuestiones previas. Esta innovación busca agilizar los juicios penales, permitiendo resolver incidencias procesales antes de la vista oral, evitando retrasos innecesarios en la tramitación de los casos.
- » **Justicia restaurativa como alternativa.** La norma incorpora el uso de la justicia restaurativa en el ámbito penal, ofreciendo una opción complementaria al sistema punitivo tradicional. A través de estos programas, se fomenta la reparación del daño causado a la víctima y la reinserción social del infractor, siempre con el consentimiento de las partes involucradas.
- » **Expansión de las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.** Los juzgados especializados en violencia de género amplían su ámbito de actuación para incluir delitos como agresiones sexuales, acoso sexual, mutilación genital femenina y matrimonios forzados. Aunque esta medida busca una mayor protección para las víctimas, ha generado inquietudes por el posible aumento de carga en estos tribunales.
- » **Creación de secciones especializadas en violencia contra menores.** Se establecen nuevas secciones judiciales encargadas de la instrucción de delitos graves cometidos contra menores, como homicidios, lesiones y delitos sexuales. Con esta reforma, se busca garantizar un enfoque más adecuado y especializado en los procedimientos que afectan a víctimas infantiles y adolescentes.
- » **Mayor agilidad en la conformidad en el Procedimiento Sumario.** Se facilita el reconocimiento de culpabilidad por parte del acusado en el procedimiento sumario ordinario. Esto permitirá acelerar la resolución de ciertos casos, descongestionando la carga de trabajo de los tribunales y evitando la prolongación innecesaria de procesos penales.

2. Legislative developments

Organic Law 1/2025, of 2 January, on measures for the efficiency of the Public Service of Justice, aims to modernise and streamline the judicial system in Spain through a series of structural and procedural reforms. This legislation seeks to improve the organisation of the judicial bodies, reduce the duration of proceedings and guarantee greater specialisation in the resolution of conflicts. In the criminal sphere, Organic Law 1/2025 introduces significant changes that affect the investigation phase, the holding of trials and the enforcement of sentences, with special emphasis on the protection of victims and the improvement of the judicial response to certain crimes. The main changes that this reform introduces to the criminal justice system are detailed below.

- » **Creation of Instance Courts (*Tribunales de Instancia*).** The reform introduces the replacement of single-judge courts by Instance Courts in each judicial district. This measure is intended to improve specialisation and optimise the management of criminal proceedings by grouping these proceedings into specific sections within these new judicial bodies.
- » **Preliminary Hearings in Abbreviated Proceedings.** A preliminary hearing has been incorporated into abbreviated proceedings, replacing the traditional phase of preliminary questions. This reform seeks to speed up criminal trials, allowing procedural issues to be resolved before the oral hearing, thus avoiding unnecessary delays in the processing of cases.
- » **Restorative justice as an alternative.** Organic Law 1/2025 incorporates the use of restorative justice in criminal matters, offering an option that complements the traditional punitive system. Through these programmes, the reparation of the damage caused to victims and the social reintegration of offenders is encouraged, always with the consent of the parties involved.
- » **Expansion of the powers of the Violence against Women Courts.** The courts specialising in gender violence are expanding their scope of action to include crimes such as sexual assault, sexual harassment, female genital mutilation and forced marriage. Although this measure seeks to provide greater protection for victims, it has raised concerns about the possible increase in the workload of these courts.
- » **Creation of sections specialising in violence against minors.** New judicial divisions have been established to deal with serious crimes committed against minors, such as homicide, assault and sexual offences. This reform seeks to ensure a more appropriate and specialised approach to proceedings involving child and adolescent victims.
- » **Greater flexibility in compliance with Summary Proceedings.** It has been made easier for the accused to admit guilt in ordinary summary proceedings. This will speed up the resolution of certain cases, reducing the workload of the courts and avoiding unnecessarily protracted criminal proceedings.

- » **Modificaciones en Juicios Rápidos y Diligencias Urgentes.** Se establecen ajustes en la regulación de los juicios rápidos y las diligencias urgentes, con la intención de reducir la complejidad procedimental en delitos flagrantes o de menor gravedad. Este cambio tiene como propósito mejorar la eficiencia del sistema penal y evitar dilaciones innecesarias. De esta forma, con el objetivo de abordar el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles de manera más efectiva, la ley introduce mecanismos para agilizar la resolución de estos procedimientos. Se busca proporcionar respuestas rápidas a los afectados y evitar largos litigios en casos de usurpación de propiedades.
- » **Mejoras en la ejecución de sentencias penales.** Para optimizar la aplicación de las resoluciones judiciales en materia penal, la ley incorpora medidas dirigidas a agilizar la ejecución de sentencias. Con ello, se pretende garantizar el cumplimiento efectivo de las penas impuestas y brindar mayor seguridad a las víctimas.
- » **Implementación gradual y necesidad de recursos.** La aplicación de estas reformas se llevará a cabo de manera progresiva, aunque algunos sectores han expresado dudas sobre la disponibilidad de los recursos necesarios. La falta de personal y medios podría dificultar la efectividad de los cambios previstos, lo que genera preocupación entre los operadores jurídicos.
- » **Changes to Fast-Track Trials and Expedited Proceedings.** Changes have been made to the regulation of fast-track trials and expedited proceedings, with the intention of reducing procedural complexity in flagrant or less serious crimes. The purpose of this change is to improve the efficiency of the criminal justice system and avoid unnecessary delays. Thus, with the aim of tackling the illegal occupation of property more effectively, Organic Law 1/2025 introduces mechanisms to speed up the resolution of these proceedings. The aim is to provide quick responses to those affected and avoid lengthy litigation in cases of the illegal occupation of property.
- » **Improvements in the enforcement of criminal sentences.** In order to optimise the enforcement of court decisions in criminal matters, Organic Law 1/2025 incorporates measures aimed at speeding up the enforcement of sentences. This is intended to ensure the effective enforcement of the sentences imposed and to provide greater security to the victims.
- » **Gradual implementation and the need for resources.** The reforms will be implemented progressively, although some sectors have expressed doubts about the availability of the necessary resources. The lack of staff and resources could hamper the effectiveness of the planned changes, which is causing concern among legal practitioners.

Medio Ambiente

Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituyen las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE. La norma introduce nuevas categorías de infracciones, incluyendo la contaminación grave, la gestión inadecuada de residuos peligrosos y la destrucción de hábitats protegidos, al tiempo que refuerza la responsabilidad penal tanto de personas físicas como jurídicas. Se establecen penas de hasta diez años de prisión para los delitos más graves y multas significativas para las empresas, pudiendo alcanzar el 5% del volumen de negocio anual o hasta 40 millones de euros. Además, impone la obligación a los Estados miembros de garantizar la reparación de los daños ambientales y de intensificar la cooperación judicial para combatir estos delitos de manera más efectiva. La Directiva deberá ser transpuesta a los ordenamientos nacionales antes del 21 de mayo de 2026, marcando un hito en la lucha contra la criminalidad medioambiental en la UE.

Diligencia Debida. ESG

Se ha publicado en el DOUE la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859 ("CSDDD"). La Directiva (UE) 2024/1760, aprobada el 13 de junio de 2024, establece un marco obligatorio de diligencia debida en materia de sostenibilidad para determinadas empresas que operan en la Unión Europea, con el objetivo de prevenir, mitigar y reparar impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de su cadena de valor. Su ámbito de aplicación abarca grandes empresas y ciertos grupos empresariales, incluidos aquellos con sede fuera de la UE pero con actividad

Environment

Directive (EU) 2024/1203 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on the protection of the environment through criminal law and replacing Directives 2008/99/EC and 2009/123/EC. The Directive introduces new categories of offences, including serious pollution, improper management of hazardous waste and the destruction of protected habitats, while reinforcing the criminal liability of both natural and legal persons. Penalties of up to ten years imprisonment have been established for the most serious offences, as well as significant fines for companies, which can reach 5% of the annual turnover or up to 40 million euros. In addition, the Directive obliges Member States to guarantee the repair of environmental damage and to step up judicial cooperation to combat these crimes more effectively. The Directive must be transposed into national law by 21 May 2026, marking a milestone in the fight against environmental crime in the EU.

Due Diligence. ESG

Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859 (the "CSDDD"), has been published in the OJEU. Directive (EU) 2024/1760, approved on 13 June 2024, establishes a mandatory sustainability due diligence framework for certain companies operating in the European Union, with the aim of preventing, mitigating and remedying adverse impacts on human rights and the environment throughout the value chain of these companies. Its scope covers large companies and certain business groups, including those based outside the EU but with significant activity in the European market. The Directive requires the integration of control and supervision

significativa en el mercado europeo. La norma impone la integración de mecanismos de control y supervisión en las políticas empresariales, incluyendo la identificación y evaluación de riesgos, la adopción de planes de transición climática y la implementación de medidas correctivas en caso de incumplimiento. Además, introduce un régimen sancionador y de responsabilidad civil por daños, con multas que pueden alcanzar hasta el 5 % del volumen de negocios mundial neto de la empresa infractora. Su transposición deberá completarse en un plazo de dos años, estableciendo nuevas obligaciones que refuerzan la responsabilidad empresarial en la sostenibilidad y el cumplimiento normativo en la UE.

Registro Central de Delincuentes Sexuales

Real Decreto 407/2024, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Esta reforma amplía el alcance y contenido de la información registrada, optimiza los mecanismos de consulta y acceso por parte de autoridades competentes e introduce nuevas garantías en la gestión y actualización de los datos. Asimismo, se refuerzan los procedimientos de intercambio de información a nivel europeo, en línea con los principios de cooperación judicial y policial en el ámbito de la protección de menores y la lucha contra la delincuencia sexual. Con esta modificación, el Registro se adapta a las nuevas exigencias normativas y tecnológicas, garantizando un mayor control sobre los antecedentes penales de condenados por delitos sexuales y reforzando las medidas de seguridad jurídica en su aplicación.

Cooperación judicial

Ley Orgánica 4/2024, de 18 de octubre, por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) busca adaptar el marco normativo español a la regulación de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). Esta reforma refuerza los mecanismos de intercambio de información sobre antecedentes penales entre los Estados miembros, garantizando una mayor agilidad, seguridad y coordinación en la transmisión de datos relativos a condenas impuestas en la UE. La norma incorpora disposiciones que mejoran el acceso y actualización de los registros penales, facilitando el uso de ECRIS en investigaciones y procedimientos judiciales transfronterizos, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada, terrorismo y delincuencia sexual. Con esta modificación, España cumple con los requisitos comunitarios en materia de cooperación judicial penal, fortaleciendo la eficacia y homogeneidad del sistema de intercambio de información en el ámbito europeo.

Derecho de defensa

Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa: aunque representa un avance en la consolidación de este derecho fundamental, ha sido criticada por quedarse corta respecto a las expectativas del sector jurídico. Si bien refuerza la asistencia letrada; la confidencialidad abogado-cliente y la formación de los profesionales, muchos consideran que no aborda de manera

mechanisms in business policies, including the identification and evaluation of risks, the adoption of climate transition plans and the implementation of corrective measures in the event of non-compliance. In addition, it introduces a system of sanctions and civil liability for damage, with fines of up to 5% of the offending company's net global turnover. Its transposition must be completed within two years, establishing new obligations that reinforce corporate responsibility for sustainability and regulatory compliance in the EU.

Central Register of Sex Offenders

Royal Decree 407/2024, of 23 April, amending Royal Decree 1110/2015, of 11 December, which regulates the Central Register of Sex Offenders. This reform expands the scope and content of the information registered, optimises the mechanisms for consultation and access by the competent authorities and introduces new guarantees for the management and updating of data. Similarly, the procedures for the exchange of information at European level have been reinforced, based on the principles of judicial and police cooperation in the context of the protection of minors and the fight against sexual crime. With this amendment, the Register has been adapted to new regulatory and technological requirements, guaranteeing greater control over the criminal records of those convicted of sex offences and reinforcing legal security measures in its application.

Judicial cooperation

Organic Law 4/2024, of 18 October, which amends Organic Law 7/2014, of 12 November, on the exchange of information from criminal records and consideration of criminal court decisions in the European Union, in order to adapt it to the European Union legislation on the European Criminal Records Information System (ECRIS), seeks to adapt the Spanish regulatory framework to the European Union regulations on the European Criminal Records Information System (ECRIS). This reform reinforces the mechanisms for the exchange of information regarding criminal records between Member States, guaranteeing greater agility, security and coordination in the transfer of data relating to convictions imposed in the EU. Organic Law 4/2024 incorporates provisions that improve access to and update criminal records, facilitating the use of ECRIS in cross-border investigations and judicial proceedings, especially in cases related to organised crime, terrorism and sexual offences. With this amendment, Spain fulfils EU requirements in the area of criminal judicial cooperation, strengthening the efficiency and homogeneity of the system for the exchange of information at the European level.

The right of defence

Organic Law 5/2024, of 11 November, on the Right of Defence: although it represents a step forward in the consolidation of this fundamental right, Organic Law 5/2024 has been criticised for falling short of the expectations of the legal sector. Although it reinforces legal aid, lawyer-client confidentiality and the training of professionals, many consider that it does not sufficiently address

suficiente aspectos clave como el acceso real y efectivo a una defensa de calidad en situaciones de vulnerabilidad, la dotación de mayores recursos para la asistencia jurídica gratuita o una regulación más precisa del papel del abogado en las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. La falta de un desarrollo más ambicioso en estos puntos ha generado decepción entre quienes esperaban una reforma más profunda y garantista.

Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

Texto BOE. El Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuya creación se prevé en la Ley 2/2023, establece como prioridades garantizar la protección de la persona informante y servir de pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción. Además, reconoce la autonomía funcional de la Autoridad debiendo actuar siempre con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier otra organización pública o privada. La Autoridad recibirá las denuncias por medio de un canal seguro, se realizará la correspondiente comprobación y, si procede, se remitirá a la Fiscalía. En todo momento, se mantendrá el anonimato del denunciante. Asimismo, se adoptarán medidas de protección frente a represalias como, por ejemplo, la nulidad de los actos que supongan dicha represalia. Además, el organismo empleará medios de apoyo a las personas informantes relacionadas con información y asesoramiento, asistencia jurídica o apoyo psicológico o financiero, dependiendo siempre de las necesidades de cada caso.

Aprobación de la Directiva sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo

Las nuevas leyes europeas contra el blanqueo de capitales ya tienen el sello definitivo de los Veintisiete. El paquete, que consta de tres reglamentos y dos directivas, ha sido ratificado este jueves por el Consejo de la UE en el que es su paso definitivo, puesto que ya había pasado por el filtro del Parlamento Europeo. Estas normas llevan aparejada la creación de una agencia europea contra el blanqueo de dinero y estrechan el control sobre sectores en los que potencialmente hay más riesgo de que se desarrollen estas actividades, como los criptoactivos, la industria de productos de lujo o los clubes de fútbol. Por otro lado, se establecerá una nueva Autoridad Europea para la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLA), que tendrá poderes de supervisión directos e indirectos sobre entidades financieras de alto riesgo y también apoyará al sector no financiero, coordinando y apoyando a las unidades de inteligencia financiera. Iniciará operaciones a mediados de 2025. Tras la aprobación del Consejo, han procedido a publicarse el pasado 19 de junio en el Diario Oficial de la UE y entrarán en vigor:

- » **Reglamento (UE) 2024/1620 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024**, por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010.
- » **Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024**, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

key aspects such as real and effective access to quality defence in situations of vulnerability, the provision of greater resources for free legal aid or a more precise regulation of the role of lawyers in the investigative proceedings of the Public Prosecutor's Office. The absence of more ambitious progress in these areas has led to disappointment among those who were hoping for a more far-reaching reform that would guarantee rights.

Royal Decree approving the Statute of the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers, A.A.I.

BOE Text. The Statute of the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers, the creation of which is provided for in Law 2/2023, prioritises guarantees for the protection of whistleblowers and serves as an institutional pillar in the prevention of and fight against fraud and corruption. Furthermore, it recognises the functional autonomy of the Authority, which must always act independently from the government, public administrations and any other public or private organisation. The Authority will receive complaints through a secure channel, carry out the corresponding verification and, if appropriate, refer them to the Public Prosecutor's Office. The anonymity of the complainant will be maintained at all times. Similarly, measures will be adopted to protect against victimisation, such as, for example, the nullity of acts that constitute such victimisation. In addition, the Authority will provide support to whistleblowers in the form of information and advice, legal assistance or psychological or financial support, depending on the needs of each case.

Adoption of the Directive on money laundering and terrorist financing

Europe's new anti-money laundering laws now have the final stamp of approval from the EU's 27 members. The package, which consists of three regulations and two directives, was ratified on Thursday 30 May 2024 by the Council of the European Union in what is its final step, having already been approved by the European Parliament. These rules involve the creation of a European anti-money laundering agency and the tightening of control over sectors where there is potentially a greater risk of these activities taking place, such as crypto-assets, the luxury goods industry and football clubs. Furthermore, a new European Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) will be established, which will have direct and indirect supervisory powers over high-risk financial institutions and will also support the non-financial sector by coordinating and supporting financial intelligence units. It will begin operating in mid-2025. Following its approval by the Council, the following were published in the Official Journal of the EU on 19 June 2024 and will enter into force:

- » **Regulation (EU) 2024/1620 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024** establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 1094/2010 and (EU) No 1095/2010.
- » **Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024** on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing.

» **Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024**, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva y (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849. Para marzo de 2025, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa abrió un plazo de consulta pública para la Transposición de esta Directiva en España.

El Reglamento de lucha contra el blanqueo de capitales se aplicará tres años después de su entrada en vigor. Los Estados miembros dispondrán de dos años para transponer algunas partes de la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales y de tres años para otras.

DOUE. Rusia. Ampliación de Sanciones

El pasado 27 de mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea publicó el **Reglamento (UE) 2024/1485**, por el que se adoptan medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Rusia. El Reglamento se apoya en la **Decisión PESC 2024/1484** de la misma fecha y ambos introducen una serie de restricciones a la exportación de determinados productos que puedan utilizarse para la represión interna o la vigilancia e interceptación de las comunicaciones en Rusia. Se establece así un nuevo régimen que permitirá a la Unión Europea sancionar a quienes presten apoyo financiero, técnico o material a las personas y entidades que cometen violaciones de los derechos humanos en Rusia, o a quienes estén asociados con ellos o sean de otro modo partícipes en dichos actos.

Definición de delitos y sanciones por incumplimiento de las medidas restrictivas de la UE

Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2018/1673. Con la definición de delitos y sanciones por incumplimiento de las medidas restrictivas de la UE, la Directiva marca un hito importante en la armonización de la aplicación de las sanciones en la UE, así como en el desarrollo del Derecho penal europeo en general. Los Estados miembros deben velar por que la vulneración de las medidas restrictivas de la UE pueda ser castigada con sanciones penales efectivas y proporcionadas, que varíen en función del delito. No obstante, cuando la vulneración sea intencionada, deberá poder ser castigada con una pena máxima de prisión. Además, las personas que hayan vulnerado las medidas restrictivas de la UE podrán ser también objeto de multas. Las personas jurídicas también pueden tener responsabilidad penal cuando el delito haya sido cometido por una persona con un cargo directivo en la organización. En tales casos, las sanciones podrán incluir la inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales y la retirada de permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades económicas.

» **Directive (EU) 2024/1640 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024** on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Directive (EU) 2015/849. In March 2025, the Ministry of Economy, Trade and Enterprise opened a public consultation period for the transposition of this Directive in Spain.

The Anti-Money Laundering Regulation will apply three years after its entry into force. Member States will have two years to transpose some parts of the Anti-Money Laundering Directive and three years for others.

OJEU. Russia. Increased Sanctions

On 27 May 2024, the Council of the European Union published **Regulation (EU) 2024/1485** concerning restrictive measures in view of the situation in Russia. The Regulation is based on **CFSP Decision 2024/1484** of the same date and both introduce a series of restrictions on the export of certain products that can be used for internal repression or the surveillance and interception of communications in Russia. This establishes a new regime that will allow the European Union to sanction those who provide financial, technical or material support to persons and entities that commit human rights violations in Russia, or to those who are associated with them or are otherwise involved in such acts.

Definition of offences and sanctions for non-compliance with EU restrictive measures

Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673. With the definition of offences and penalties for non-compliance with EU restrictive measures, the Directive marks an important milestone in the harmonisation of the application of penalties in the EU, as well as the development of European criminal law in general. Member States must ensure that violations of EU restrictive measures are punishable by effective and proportionate criminal penalties, which may vary depending on the offence. However, where the violation is intentional, it must be punishable by a maximum term of imprisonment. In addition, persons who have violated EU restrictive measures may also be subject to fines. Legal persons may also be criminally liable when the offence has been committed by a person in a managerial position in the organisation. In such cases, penalties may include disqualification from engaging in business activities and the withdrawal of permits and authorisations to engage in economic activities.

3. Novedades jurisprudenciales

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Gran Sala), de 30 de abril de 2024. **Asunto C-670/22 – Interpretación de la Directiva 2014/41/UE y validez de órdenes europeas de investigación basadas en pruebas obtenidas mediante intervención de telecomunicaciones cifradas (EncroChat)**

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analiza en esta sentencia la legalidad de las órdenes europeas de investigación (OEI) emitidas por Alemania para obtener pruebas recopiladas por Francia mediante la intervención de telecomunicaciones en EncroChat, una red cifrada utilizada principalmente en actividades criminales. La cuestión clave es si estas órdenes cumplen con la Directiva 2014/41/UE y si las pruebas obtenidas pueden ser utilizadas en procedimientos penales sin vulnerar derechos fundamentales.

El Tribunal establece que un fiscal puede emitir una OEI para la transmisión de pruebas, siempre que esta transmisión sea posible en un caso interno similar en su país. Sin embargo, si la obtención inicial de las pruebas en el Estado de ejecución hubiera requerido autorización judicial, la transmisión también debe cumplir ese requisito. Asimismo, las OEI deben cumplir los principios de necesidad y proporcionalidad, no pudiendo basarse en sospechas genéricas sin indicios concretos de delito.

Otro punto clave de la sentencia es que la infiltración en dispositivos cifrados como EncroChat equivale a una “intervención de telecomunicaciones” en el sentido de la Directiva, lo que implica que el Estado que realiza la intervención debe notificar previamente a la autoridad competente del Estado afectado. Además, el Tribunal refuerza que las pruebas obtenidas en posible vulneración del Derecho de la UE deben ser excluidas del proceso penal si el acusado no puede rebatir su validez de manera efectiva.

En definitiva, el TJUE reitera que la cooperación judicial en materia penal debe equilibrar la lucha contra el crimen organizado con la protección de derechos fundamentales, garantizando el respeto al principio de reconocimiento mutuo entre Estados miembros sin comprometer la legalidad en la obtención y utilización de pruebas.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 128/2024, de 8 de febrero Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde. **Asunto: Nulidad de nuevas imputaciones tras el fin del plazo de instrucción**

El Tribunal Supremo examina el impacto de la práctica de diligencias de investigación extemporáneas en el derecho a un proceso con todas las garantías y en la tutela judicial efectiva, conforme al artículo 24 de la Constitución Española. La Sala Segunda establece que la realización de diligencias fuera del plazo legalmente previsto no implica, por sí misma, la vulneración de los mencionados derechos fundamentales ni genera automáticamente la nulidad de la prueba obtenida. No obstante, la incorporación de tales diligencias al procedimiento supone una irregularidad procesal, lo que conlleva su invalidez a efectos del artículo 779 de la LECrim, impidiendo que puedan fundamentar la prosecución de la causa.

3. Case law developments

JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION (Grand Chamber) of 30 April 2024. **Case C-670/22 - Interpretation of Directive 2014/41/EU and the validity of European Investigation Orders based on evidence obtained by the interception of encrypted telecommunications (EncroChat)**

In this judgment, the Court of Justice of the European Union (CJEU) analysed the legality of the European Investigation Orders (EIOs) issued by Germany to obtain evidence gathered by France through the interception of telecommunications on EncroChat, an encrypted network used mainly for criminal activities. The key question was whether these orders complied with Directive 2014/41/EU and whether the evidence obtained could be used in criminal proceedings without violating fundamental rights.

The Court held that a prosecutor may issue an EIO for the transfer of evidence, provided that such transfer would be possible in a similar domestic case in his or her country. However, if the initial gathering of evidence in the executing state would have required judicial authorisation, the transfer must also fulfil that requirement. Similarly, EIOs must comply with the principles of necessity and proportionality, and cannot be based on generic suspicions without concrete evidence of a crime.

Another key point of the judgment is that the hacking of encrypted devices such as EncroChat amounts to “interception of telecommunications” within the meaning of the Directive, which means that the state carrying out the interception must first notify the competent authority of the state concerned. Furthermore, the Court stressed that evidence obtained in possible violation of EU law must be excluded from criminal proceedings if the accused cannot effectively challenge its validity.

In short, the CJEU reiterated that judicial cooperation in criminal matters must balance the fight against organised crime with the protection of fundamental rights, guaranteeing respect for the principle of mutual recognition between Member States without compromising the legality of the obtaining and use of evidence.

SUPREME COURT JUDGMENT 128/2024 of 8 February. Reporting Judge: The Honourable Mr Pablo Llarena Conde. **Concerning: Nullity of new charges after the end of the pre-trial investigation period**

In this case, the Supreme Court examined the impact of time-barred investigative proceedings on the right to due process and effective judicial protection, under Article 24 of the Spanish Constitution. The Second Chamber held that the carrying out of proceedings outside the legally prescribed period does not, in and of itself, constitute a violation of the aforementioned fundamental rights, nor does it automatically render the evidence obtained inadmissible. However, the incorporation of such measures into the proceedings constitutes a procedural irregularity, which renders them invalid under Article 779 of the Law of Criminal Procedure, preventing them from being used as the basis for the prosecution of the case.

El Alto Tribunal precisa que la invalidez de las diligencias extemporáneas no obstaculiza la evolución del procedimiento hacia la fase intermedia y el juicio oral, siempre que la información obtenida dentro del plazo de instrucción proporcione un soporte probatorio suficiente para sostener la acusación. Asimismo, la Sala declara que la prueba obtenida irregularmente no puede fundamentar la continuación de la causa, salvo que el juicio oral se sustente en otras fuentes probatorias obtenidas en tiempo y forma, que posean suficiente capacidad inculpativa.

Por otro lado, el Tribunal rechaza la posibilidad de ampliar la imputación a nuevos sujetos procesales cuando esta pretensión se derive de diligencias practicadas fuera del límite temporal establecido en el artículo 324 LECrim. En virtud del principio de seguridad jurídica y del derecho de defensa, toda nueva imputación basada en diligencias extemporáneas deberá ser declarada nula, garantizando así que el proceso penal se desarrolle conforme a los principios de legalidad y debido proceso.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 168/2024, de 23 de febrero
Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco. Asunto: delimitación del dies a quo y la acumulación de denuncias en el cómputo de los plazos de instrucción

El Tribunal Supremo establece un criterio claro sobre el *dies a quo* en el cómputo del plazo del artículo 324 LECrim, diferenciando entre actuaciones gubernativas y jurisdiccionales. En este sentido, señala que no pueden computarse dentro del plazo de instrucción aquellas actuaciones de naturaleza administrativa, como el reparto de denuncias, dado que carecen de contenido investigador. Aunque formalmente puedan estar revestidas de apariencia jurisdiccional, su finalidad es meramente organizativa, por lo que su existencia no puede anticipar el inicio del plazo procesal. Solo la incoación efectiva de diligencias con propósito investigador marca el momento de inicio del plazo de instrucción.

Asimismo, el Alto Tribunal analiza la acumulación de denuncias dentro de un mismo procedimiento y su incidencia en los plazos procesales. En este sentido, se establece que cuando una nueva denuncia amplía el objeto de la investigación, se debe computar un nuevo plazo de instrucción desde la fecha de su incoación, y no desde la apertura de la investigación más antigua. Esta interpretación impide que la acumulación de diligencias provoque el agotamiento artificial del plazo procesal, lo que garantizaría la exhaustividad en la instrucción y la viabilidad de la acción penal, evitando la preclusión prematura del procedimiento.

En cuanto a la lógica procesal del reinicio del plazo, el Tribunal enfatiza que la acumulación de nuevos hechos investigados no puede estar sujeta a los plazos de investigaciones previas, ya que ello supondría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del *ius puniendi* del Estado. La jurisprudencia consolidada avala este criterio, dado que iniciar el cómputo del plazo antes de la aparición de nuevos hechos sería irracional y atentaría contra la correcta persecución del delito. En consecuencia, el motivo impugnado es desestimado, ratificando que el auto de declaración de complejidad fue dictado dentro del plazo legalmente establecido y reforzando la necesidad de una interpretación flexible que garantice la eficacia de la instrucción penal.

The Supreme Court stated that the invalidity of the out-of-time proceedings does not prevent the case from progressing to the intermediate phase and the oral hearing, provided that the information obtained within the investigative phase provides sufficient evidence to support the accusation. Furthermore, the Court declared that evidence obtained irregularly cannot form the basis for the continuation of the case unless the oral trial is supported by other sources of evidence obtained in a timely and correct manner, which have sufficient inculpatory capacity.

The Court also rejected the possibility of adding new defendants when this arose from investigative procedures carried out outside the time limit established in Article 324 of the Law of Criminal Procedure. Under the principles of legal certainty and the right of defence, any new indictment based on out-of-time proceedings must be declared null, thus ensuring that the criminal proceedings are conducted in accordance with the principles of legality and due process.

SUPREME COURT JUDGMENT 168/2024 of 23 February.
Reporting Judge: The Honourable Mr Andrés Palomo del Arco.
Concerning: setting the start date of the limitation period and the grouping of criminal complaints in the calculation of the time limits for the investigation

The Supreme Court has established a clear approach to the starting date when calculating the limitation period in Article 324 of the Law of Criminal Procedure, differentiating between governmental and jurisdictional actions. The Court ruled that administrative actions, such as the distribution of criminal complaints, cannot be counted within the investigation period because they lack investigative content. Although they may appear to have a jurisdictional character, their purpose is merely organisational, and, therefore, their existence cannot be used to mark the start of the limitation period for proceedings. Only the effective initiation of proceedings with an investigative objective establishes the start of the limitation period for the investigation.

The Supreme Court also analysed the grouping of complaints within the same proceedings and its impact on procedural deadlines. Thus, the Court established that when a new criminal complaint broadens the scope of an investigation, a new period of investigation must be calculated from the date of its initiation, and not from the opening of the oldest investigation. This interpretation prevents the grouping of proceedings from artificially exhausting the procedural limitation period, which would guarantee the exhaustiveness of the investigation and the viability of the criminal action, avoiding the premature termination of the proceedings.

Concerning the procedural logic of restarting the limitation period, the Court emphasised that the addition of new investigated facts cannot be subject to the limitation periods of previous investigations, as this would entail a violation of the right to effective judicial protection and the *ius puniendi* of the State. Consolidated case law supports this approach, given that starting the calculation of the limitation period before the appearance of new facts would be irrational and would undermine the correct prosecution of the offence. Consequently, the contested plea was dismissed, confirming that the order declaring that the proceedings were complex was issued within the legally established limitation period and reinforcing the need for a flexible interpretation to ensure the effectiveness of the criminal investigation.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 260/2024, de 15 de marzo, Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco. Asunto: *Condena por un delito que no fue objeto de acusación*

La STS 260/2024 aborda la relación de homogeneidad entre los delitos de administración desleal (art. 252 CP) y apropiación indebida (art. 253 CP), destacando que ambos protegen el mismo bien jurídico: el patrimonio ajeno. Aunque se diferencian en que la apropiación indebida implica la disposición definitiva de los bienes, mientras que la administración desleal se basa en un abuso de poder en la gestión, su similitud permite recalificar los hechos entre ambos tipos penales sin que ello implique una mutación esencial. Esta interpretación, reforzada por la LO 1/2015, encuentra sustento en la jurisprudencia que establece que los elementos comunes de ambos delitos justifican su intercambiabilidad, siempre que se respeten las garantías procesales.

El principio acusatorio, fundamental en este análisis, exige que nadie sea condenado por hechos o delitos distintos a los inicialmente acusados, salvo que exista una relación de homogeneidad y la nueva calificación no suponga una pena más grave ni introduzca hechos nuevos. En el caso concreto, la defensa del acusado tuvo oportunidad de controvertir todos los elementos fácticos y normativos de la acusación inicial, centrada en la administración desleal, lo que asegura que no hubo indefensión. Además, la recalificación no vulneró la prohibición de *reformatio in peius*, ya que no agravó las consecuencias jurídicas ni se modificaron los elementos esenciales del hecho probado.

El Tribunal subraya la previsibilidad de la condena como un requisito esencial del principio acusatorio, tal como lo establece la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La administración desleal fue la calificación jurídica debatida desde la instancia inicial, garantizando así que el acusado pudo preparar su defensa con pleno conocimiento de los cargos. Aunque el tribunal de apelación consideró que los hechos podían encajar en un delito de apropiación indebida, al no haber sido objeto de acusación, el Tribunal Supremo resolvió que dichos hechos también integraban todos los elementos del delito de administración desleal, que fue correctamente aplicado en primera instancia.

En este contexto, el Tribunal concluye que la homogeneidad entre ambos delitos permite recalificaciones en fase de recurso sin vulnerar los derechos procesales del acusado, siempre que se respeten la identidad del bien jurídico protegido y la naturaleza de los hechos probados. Así, se confirma que la conducta analizada, aunque pudiera haber sido calificada como apropiación indebida, también cumplía los requisitos del delito de administración desleal, que fue el título inicialmente imputado y mantenido en el proceso. Esto garantiza el equilibrio entre la correcta aplicación del derecho y las garantías del acusado.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 262/2024, de 18 de marzo: Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez. Asunto: *Delimitación entre estafa y fraude fiscal: aplicación del principio de especialidad*

En la STS 262/2024, el Tribunal Supremo analiza la relación entre los delitos de estafa (art. 248 CP) y fraude a la Hacienda Pública (art. 305 CP), centrándose en el principio de especialidad y el concurso de normas, cuando la conducta no presenta todos los

SUPREME COURT JUDGMENT 260/2024 of 15 March. Reporting Judge: The Honourable Mr Andrés Palomo del Arco. Concerning: *Conviction for a crime that was not the subject of a charge*

Supreme Court Judgment 260/2024 addresses the similarity between the offences of disloyal administration (Article 252 of the Criminal Code) and misappropriation (Article 253 of the Criminal Code), emphasising that both protect the same legal interest: the property of others. Although they differ in that misappropriation involves the definitive disposal of assets, while unfair administration is based on an abuse of power in management, their similarity makes it possible to reclassify the facts between the two criminal offences without this entailing a fundamental change. This interpretation, reinforced by Organic Law 1/2015, is supported by case law which establishes that the common elements of both offences justify their interchangeability, provided that procedural guarantees are respected.

The accusatory principle, fundamental in this analysis, requires that no one be convicted of acts or crimes other than those with which they were initially charged unless there is a similarity between the offences and the new classification does not involve a more serious penalty or introduce new facts. In this specific case, the accused's defence team had the opportunity to challenge all the facts and legal elements of the initial charge, which centred on disloyal administration, thus ensuring that the accused was not left without a defence. Furthermore, the reclassification did not violate the prohibition against *reformatio in peius*, where, as the result of an appeal, an appellant is placed in a worse position than if there had been no appeal since it did not exacerbate the legal consequences nor did it change the essential elements of the proven act.

The Court emphasised the predictability of the sentence as an essential requirement of the accusatory principle, as established by the doctrine of the European Court of Human Rights. The legal classification of disloyal administration was initially debated, thus guaranteeing that the accused could prepare his defence with full knowledge of the charges. Although the appellate court considered that the facts could fit the crime of misappropriation, as it had not been the subject of an indictment, the Supreme Court ruled that the facts also constituted all the elements of the crime of disloyal administration, which was correctly applied in the first instance.

In this context, the Court concluded that the similarity between the two offences allowed for reclassification in the appeal phase without violating the procedural rights of the accused provided that the identity of the legally protected interest and the nature of the proven facts were respected. Thus, it was confirmed that the conduct in question, although it could have been classified as misappropriation, also fulfilled the requirements of the crime of disloyal administration, which was the initial charge that was maintained throughout the proceedings. This guaranteed a balance between the correct application of the law and the defendant's guarantees.

SUPREME COURT JUDGMENT 262/2024 of 18 March. Reporting Judge: The Honourable Mr Manuel Marchena Gómez. Concerning: *The distinction between fraud and tax fraud: application of the principle of speciality*

In Supreme Court Judgment 262/2024, the Supreme Court analysed the relationship between the crimes of fraud (Article 248 of the Criminal Code) and fraud against the Public Treasury (Article 305 of the Criminal Code), focusing on the principle of speciality and the

elementos que configuran el tipo penal especial. El caso versa sobre la creación de sociedades ficticias para solicitar devoluciones indebidas del IVA, con un importe total defraudado inferior a 120.000 euros, lo que impedía aplicar el delito contra la Hacienda Pública por no cumplirse la condición objetiva de punibilidad del tipo especial.

La Sala Segunda establece que el principio de especialidad no opera de manera automática para absolver conductas cuando no se cumplen todos los elementos del tipo especial. Si el delito especial no integra todos los elementos del tipo general, debe realizarse un segundo juicio de tipicidad para determinar si los hechos pueden encuadrarse en este último. En este caso, aunque no se alcanzaba el límite de 120.000 euros exigido por el art. 305 CP, los hechos cumplían con los requisitos del delito de estafa, al haber existido un engaño destinado a provocar un desplazamiento patrimonial en perjuicio de la Hacienda Pública.

La sentencia subraya que la especialidad requiere que el tipo especial abarque todos los elementos del tipo general, pero con una estructura más específica. Cuando no se cumple esta condición, como en el presente caso, el delito general no queda desplazado. El Tribunal menciona precedentes relacionados con fraudes similares, como los cometidos en subvenciones públicas, destacando que en estos casos la ausencia de elementos específicos del tipo especial no exime de responsabilidad penal bajo el tipo general.

En conclusión, el Tribunal revoca la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que había aplicado de manera errónea el principio de especialidad para descartar el delito de estafa. Declara que los hechos constituyen un delito de estafa en grado de tentativa, confirmando que una interpretación incorrecta del principio de especialidad no puede llevar a la impunidad de conductas claramente defraudatorias.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 682/2024, de 27 de junio.
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez. **Asunto:** *La protección penal de las marcas: la confusión del consumidor no es requisito del delito*

La STS 682/2024 canaliza la protección penal de las marcas establecida en el artículo 274 CP, centrándose en si esta depende de la existencia de confusión entre el producto genuino y el falsificado en la mente del consumidor. El fallo refuerza que la protección penal de las marcas no requiere que el consumidor sea efectivamente engañado o confundido sobre la autenticidad del producto.

El Tribunal Supremo explica que el delito contra la propiedad industrial protege derechos exclusivos conferidos al titular de la marca, más allá del posible error del consumidor. Aunque el concepto de similitud confundible es clave en el ámbito de la propiedad industrial, no se exige que la confusión del consumidor se materialice como elemento del tipo penal. Esta interpretación deriva de la reforma introducida por la LO 1/2015, que amplió el alcance del artículo 274 CP para incluir incluso las ventas en contextos donde los consumidores pudieran reconocer claramente la falsificación, como mercados ambulantes o productos ofertados a precios inverosímiles.

overlapping of regulations, in cases where the conduct in question does not present all the elements that make up the special criminal offence. The case concerned the creation of fictitious companies to claim undue VAT refunds, where the total amount defrauded was less than 120,000 euros, which prevented the application of the offence against the Public Treasury because the objective condition of the special type of criminal liability was not met.

The Second Chamber held that the principle of speciality does not function automatically to acquit conduct when not all the elements of the special offence are met. If the special offence does not include all the elements of the general offence, a second trial must be held to determine if the facts can be categorised under the latter. In this case, although the limit of 120,000 euros required by Article 305 of the Criminal Code was not reached, the facts met the requirements of the offence of fraud, as there was a deception aimed at causing a transfer of assets to the detriment of the Public Treasury.

The judgment emphasises that speciality requires that the special offence cover all the elements of the general offence, but with a more specific structure. When this condition has not been met, as in the present case, the general offence is not replaced. The Court mentioned previous cases of similar fraud, such as those committed in public subsidies, emphasising that in these cases the absence of specific elements of the special offence does not preclude criminal liability under the general offence.

Ultimately, the Court overturned the acquittal handed down by the High Court of Justice of the Valencian Community, which had erroneously applied the principle of speciality to rule out the crime of fraud. The Court held that the facts constituted the crime of attempted fraud, confirming that an incorrect interpretation of the principle of speciality cannot lead to an exemption from punishment for clearly fraudulent behaviour.

SUPREME COURT JUDGMENT 682/2024 of 27 June. Reporting Judge: The Honourable Mr Manuel Marchena Gómez. **Concerning:** *The criminal protection of trademarks: consumer confusion is not a requirement for the crime*

Supreme Court Judgment 682/2024 defines the criminal protection of trademarks established in Article 274 of the Criminal Code by focusing on whether this hinges on the existence of confusion between the genuine product and the counterfeit product in the mind of the consumer. The judgment reinforces the fact that the criminal protection of trademarks does not require that the consumer be effectively deceived or confused about the authenticity of the product.

The Supreme Court explained that the offence against industrial property protects exclusive rights conferred on the owner of the trademark, beyond the possible error of the consumer. Although the concept of confusingly similar is key in the context of industrial property, it is not required that the consumer's confusion materialise as an element of the criminal offence. This interpretation has its origins in the reform introduced by Organic Law 1/2015, which broadened the scope of Article 274 of the Criminal Code to include sales in contexts where consumers could clearly recognise the counterfeit, such as street markets or products offered at implausible prices.

La sentencia rechaza que la falta de confusión neutralice la tipicidad penal. Según la Sala, la estructura del delito protege tanto los derechos del titular de la marca como el orden socioeconómico, con independencia del impacto directo sobre el consumidor. Este enfoque refuerza la exclusividad del derecho marcario, conforme a la Directiva 2015/2436 y el Reglamento UE 2017/1001, que otorgan un derecho exclusivo al titular de la marca sin vincularlo al posible perjuicio del adquirente.

Por último, se destaca que el sistema penal europeo avanza hacia una protección robusta de los derechos de propiedad industrial, priorizando la lucha contra la falsificación y el respeto por la exclusividad del registro marcario, sin supeditar la tutela penal a factores como el engaño o la percepción del consumidor. Este criterio refuerza la sanción de actividades ilícitas que afectan al mercado y a los derechos de los titulares de marcas, independientemente de que los consumidores sean conscientes de la naturaleza falsificada de los productos adquiridos.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1167/2024, de 19 de diciembre. Ponente: Excmo. Sr. D. Javier Hernández García. *Asunto: Aplicación de la atenuante de confesión: requisitos, fundamentos y valoración en el proceso penal*

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su sentencia 1167/2024, aborda la aplicación de la circunstancia atenuante de confesión regulada en el artículo 21.4 CP, destacando sus requisitos y fundamentos. En este caso, el acusado fue condenado por el asesinato de su abuela y recurrió en casación alegando la inaplicación de esta atenuante.

El Tribunal comienza señalando que la atenuante de confesión no requiere, como en formulaciones históricas, un arrepentimiento espontáneo, sino que se fundamenta en la facilitación significativa de la investigación del delito. Esto implica que la confesión debe permitir a las autoridades dirigir con prontitud y eficacia las actuaciones hacia el responsable, reconociendo la vigencia de la norma penal y contribuyendo al ejercicio del *ius puniendi* del Estado.

Para su aplicación, la confesión debe cumplir ciertos requisitos: debe corresponderse objetivamente y subjetivamente con la realidad de los hechos, ser realizada de forma receptiva ante las autoridades competentes, mantenerse en términos sustanciales a lo largo del procedimiento y generar un resultado efectivo en la investigación. Además, debe producirse antes de que el confesor tenga conocimiento de que las actuaciones judiciales se dirigen contra él. La atenuante se excluye si la confesión es meramente adaptativa o reactiva frente a evidencias ya obtenidas por las autoridades.

En el caso concreto, el Tribunal reconoce que, aunque el acusado inicialmente ofreció versiones falsas para eludir su responsabilidad, posteriormente confesó de forma incondicionada y facilitó la localización del arma homicida. Este acto, realizado antes de que el procedimiento se dirigiera formalmente contra él, permitió el avance significativo de la investigación, satisfaciendo los requisitos de la atenuante. El Tribunal enfatiza que la confesión no pierde eficacia atenuatoria por haber sido precedida de versiones falsas, siempre que estas no neutralicen el posterior reconocimiento genuino de los hechos.

The Court rejected the argument that the absence of confusion neutralises the criminal offence. According to the Court, the structure of the offence protects both the rights of the trademark owner and the socioeconomic order, regardless of the direct impact on the consumer. This approach reinforces the exclusivity of trademark law, under Directive 2015/2436 and EU Regulation 2017/1001, which grant an exclusive right to the trademark owner without linking it to the possible harm suffered by the purchaser.

Finally, this highlights the fact that the European criminal system is moving towards robust protection of industrial property rights, prioritising the fight against counterfeiting and respect for the exclusivity of trademark registration, without making criminal protection subject to factors such as deception or consumer perception. This approach reinforces the punishment of illegal activities that affect the market and the rights of trademark owners, regardless of whether consumers are aware of the counterfeit nature of the products purchased.

SUPREME COURT JUDGMENT 1167/2024 of 19 December. Reporting Judge: The Honourable Mr Javier Hernández García. *Concerning: Application of the mitigating factor of confession: requirements, grounds and assessment in criminal proceedings*

In this case, the Second Chamber of the Supreme Court addressed the application of the mitigating circumstance of confession governed by Article 21.4 of the Criminal Code, highlighting its requirements and grounds. In this case, the accused was convicted of the murder of his grandmother and appealed on the grounds of the failure to take into account the mitigating factor of his confession.

The Court began by noting that the mitigating factor of confession does not require, as in historic cases, spontaneous remorse, but is based on the significant contribution made to the investigation of the crime. This means that the confession must allow the authorities to pursue the perpetrator promptly and effectively, recognising the validity of the criminal law and contributing to the exercise of the State's right to impose criminal sanctions.

To qualify, the confession must fulfil certain requirements: it must correspond objectively and subjectively to the facts of the case, be made receptively to the competent authorities, be maintained in substantial terms throughout the proceedings and lead to an effective result in the investigation. Furthermore, it must take place before the confessor becomes aware that the legal proceedings are being brought against him. The mitigating factor will be excluded if the confession is merely a reaction to evidence already obtained by the authorities.

In this particular case, the Court recognised that, although the accused initially offered false versions to evade responsibility, he later confessed unconditionally, and his evidence helped to locate the murder weapon. This act, which was carried out before the proceedings were formally brought against the accused, allowed the investigation to make significant progress, thus satisfying the requirements for the application of mitigating circumstances. The Court stressed that the confession did not lose its mitigating effect because it had been preceded by false statements, provided that these did not neutralise the subsequent genuine acknowledgement of the facts.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 711/2024, de 4 de julio.
Ponente: Excmo. Sr. D. Javier Hernández García. **Asunto: Exceso extensivo en la legítima defensa: límites y consecuencias**

En la STS 711/2024, el Tribunal Supremo analiza el concepto de exceso extensivo en la legítima defensa, determinando que en el caso enjuiciado no concurría este supuesto. La cuestión central se basaba en si la respuesta del acusado, quien infligió 17 puñaladas a la víctima, superó los límites de la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión. La sentencia recurrida consideraba que el ataque prolongado, especialmente las heridas en el cráneo, evidenciaba un uso desproporcionado de la fuerza, lo que excluiría la justificación plena de la legítima defensa. Sin embargo, la Sala Segunda concluyó que los hechos probados no contenían datos suficientes para establecer con certeza que la acción defensiva había excedido los límites de lo necesario.

El Tribunal razona que la legítima defensa extensiva requiere demostrar que la agresión ya había cesado en el momento en que se produjo el resultado lesivo. En este caso, se verificó que la reacción del acusado fue inmediata y proporcional a la amenaza que representaba la víctima, quien estaba atacando con un cuchillo a su hermano. Además, la falta de precisión en los hechos probados, en cuanto a la secuencia y naturaleza de las heridas mortales, impide sostener, más allá de toda duda razonable, que el recurrente continuó atacando cuando la agresión había cesado. El Supremo enfatiza que la superación insignificante de los límites temporales de la defensa no es suficiente para excluir la justificación penal.

En consecuencia, la sentencia revoca la condena impuesta por la instancia inferior y reconoce que el acusado actuó en legítima defensa. Se reafirma así la doctrina de que el exceso extensivo en la legítima defensa debe ser acreditado con datos objetivos y concluyentes, sin que pueda sustentarse en meras hipótesis sobre la duración y proporcionalidad del ataque. Esta decisión subraya la importancia de una valoración rigurosa de los elementos fácticos en los casos en los que se alega una reacción defensiva ante una agresión ilegítima.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 3902/2024, de 12 de julio.
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. **Asunto: Análisis sobre la correcta aplicación del delito de descubrimiento y revelación de secretos empresariales**

El Tribunal Supremo aborda en esta sentencia la correcta aplicación del delito de descubrimiento y revelación de secretos empresariales, regulado en el artículo 278 CP. El caso trata de un ex empleado que, aprovechando su acceso previo a datos confidenciales de una empresa durante su labor como informático, sustrajo y ofreció dicha información a una empresa competidora a cambio de dinero.

El Tribunal detalla los elementos constitutivos del delito: la acción delictiva consiste en apoderarse, por cualquier medio, de datos, documentos o soportes que contengan secretos de empresa, o utilizar medios técnicos para descubrir dichos secretos. En este caso, la información obtenida incluía listados de clientes, balances financieros y datos de ventas, los cuales fueron ofrecidos a terceros a cambio de una contraprestación económica. La sentencia subraya que el bien jurídico protegido es la capacidad competitiva de la empresa, independientemente de que se produzca un perjuicio efectivo o se utilicen los datos sustraídos. El delito se

SUPREME COURT JUDGMENT 711/2024 of 4 July. Reporting Judge: The Honourable Mr Javier Hernández García. **Concerning: Excessive use of force in lawful defence: limits and consequences**

In Supreme Court Judgment 711/2024, the Supreme Court analysed the concept of excessive force in the context of lawful defence, concluding that this was not present in the case in question. The central issue was whether the response of the accused, who stabbed the victim 17 times, exceeded the limits of the reasonable force used to repel the assault. The judgment under appeal considered that the prolonged attack, especially the wounds to the skull, showed a disproportionate use of force, which would prevent it from being fully justified as self-defence. However, the Second Chamber concluded that the proven facts did not contain sufficient evidence to establish with certainty that the defensive action had exceeded the limits of what was necessary.

The Court held that lawful self-defence requires proof that the aggression had already ceased at the time the harmful result occurred. In this case, the accused's reaction was found to have been immediate and proportionate to the threat posed by the victim, who was attacking his brother with a knife. Furthermore, the lack of precision in the proven facts, regarding the sequence and nature of the fatal wounds, made it impossible to maintain, beyond all reasonable doubt, that the appellant continued to attack when the aggression had ceased. The Supreme Court emphasised that exceeding the time limits allowed for self-defence by a negligible amount is not enough to exclude criminal justification.

Consequently, the Court overturned the sentence imposed by the lower court and recognised that the accused had acted in self-defence. This reaffirms the doctrine that excessive force in self-defence must be proven with objective and conclusive data and cannot be based on mere hypotheses about the duration and proportionality of the attack. This judgment underlines the importance of a rigorous assessment of the facts in cases where self-defence is pleaded in response to unlawful aggression.

SUPREME COURT JUDGMENT 3902/2024 of 12 July. Reporting Judge: The Honourable Mr Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. **Concerning: Analysis of the correct application of the crime of the discovery and disclosure of business secrets**

In this judgment, the Supreme Court addressed the correct approach to the crime of the discovery and disclosure of business secrets, governed by Article 278 of the Criminal Code. The case concerned a former employee of a company who, taking advantage of his previous access to confidential company data during his work as an IT specialist, stole information and offered it to a competitor in exchange for money.

The Court listed the constituent elements of the offence: the criminal act consists of seizing, by any means, data, documents or media containing company secrets, or using technical means to discover such secrets. In this case, the information obtained included lists of clients, financial statements and sales data, which were offered to third parties in exchange for financial compensation. The Court emphasised that the legally protected asset is the competitive capacity of the company, regardless of whether there is any actual damage or whether the stolen data is used. The offence is defined as one of specific danger, with

configura como uno de peligro concreto, siendo suficiente que se ponga en riesgo la confidencialidad de la información.

El Tribunal también destaca que la revelación o cesión de los secretos constituye una agravación del tipo básico. En este caso, el acusado no solo se apropió de la información, sino que la ofreció activamente a un competidor, consumándose el delito con la entrega del soporte donde estaba almacenada la información, sin requerir que el receptor hiciera uso de ella.

Por último, el Supremo reafirma que el tipo penal protege tanto el interés patrimonial del titular de la información como el mantenimiento de una competencia leal en el mercado. La sentencia concluye que la conducta del acusado encaja plenamente en el tipo penal del artículo 278 CP, confirmando su condena por descubrimiento y revelación de secretos en grado de consumación. Este fallo refuerza la importancia de la protección penal frente a actos que vulneren la confidencialidad y competitividad empresarial.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 753/2024, de 22 de julio. Ponente: Excm. Sra. Dña. Ana María Ferrer García. Asunto: Admisibilidad de grabaciones privadas como prueba en el proceso penal

La Sentencia 753/2024 del Tribunal Supremo analiza la validez de las grabaciones de conversaciones privadas como medio de prueba en el proceso penal, poniendo especial énfasis en su impacto sobre derechos fundamentales como la intimidad y el secreto de las comunicaciones. El Tribunal reitera que las grabaciones realizadas por uno de los interlocutores no vulneran el artículo 18.3 de la Constitución Española, dado que este derecho protege las comunicaciones frente a terceros ajenos, pero no frente a quienes participan en ellas. Por ello, siempre que la grabación no se obtenga por medios ilícitos, su utilización como prueba no supone una infracción constitucional.

El fallo también subraya la relevancia del principio de proporcionalidad en la admisión de estas pruebas. Aunque no afectan el secreto de las comunicaciones, deben cumplir con requisitos como pertinencia, relevancia y necesidad en relación con los hechos investigados. Asimismo, el Tribunal enfatiza que no pueden haberse obtenido mediante coacción o vulneración de derechos fundamentales, lo que podría llevar a su exclusión del proceso.

Además, se analiza el valor probatorio de las grabaciones que contienen declaraciones inculpatórias de los propios interlocutores. En estos casos, el Tribunal establece que tales pruebas pueden tener gran peso en la determinación de los hechos, siempre que se corroboren con otros elementos de la investigación. No obstante, advierte que cualquier manipulación o edición podría afectar su validez, por lo que se debe garantizar su autenticidad e integridad para que sean admitidas en el proceso.

En conclusión, el Tribunal Supremo confirma la admisibilidad de las grabaciones privadas realizadas por uno de los participantes en la conversación, siempre que respeten los principios de proporcionalidad, necesidad y autenticidad.

it being sufficient that the confidentiality of the information is put at risk.

The Court also emphasised that the disclosure or transfer of secrets constitutes an aggravation of the basic offence. In this case, the accused not only appropriated the information, but also actively offered it to a competitor, with the offence being considered complete with the delivery of the device on which the information was stored, and without requiring the recipient to use it.

Finally, the Supreme Court affirmed that the criminal classification protects both the proprietary interest of the owner of the information and safeguards fair competition in the market. The Court concluded that the accused's conduct fully met the definition of the crime in Article 278 of the Criminal Code and upheld his conviction for the discovery and disclosure of secrets in the act of committing the crime. This judgment reinforces the importance of criminal protection against acts that violate business confidentiality and competitiveness.

SUPREME COURT JUDGMENT 753/2024 of 22 July. Reporting Judge: The Honourable Ms Ana María Ferrer García. Concerning: The admissibility of private recordings as evidence in criminal proceedings

Judgment 753/2024 of the Supreme Court analyses the validity of recordings of private conversations as evidence in criminal proceedings, placing special emphasis on their impact on fundamental rights such as privacy and the secrecy of communications. The Court reiterated that recordings made by one of the parties do not violate Article 18.3 of the Spanish Constitution, given that this right protects communications from third parties, but not from those who participate in them. Therefore, as long as the recording is not obtained by unlawful means, its use as evidence does not amount to a constitutional infringement.

The judgment also emphasises the relevance of the principle of proportionality in the admission of this evidence. Although it does not affect the secrecy of communications, such evidence must fulfil requirements such as pertinence, relevance and necessity in relation to the facts under investigation. Similarly, the Court stressed that this evidence cannot have been obtained by coercion or the violation of fundamental rights, which could lead to its exclusion from the process.

In addition, the probative value of recordings which contain incriminating statements by the participants themselves was analysed. In these cases, the Court held that such evidence can carry great weight in establishing the facts, provided that it is corroborated by other elements of the investigation. However, the Court warned that any manipulation or editing could affect its validity, and therefore its authenticity and integrity must be guaranteed in order for it to be admitted into the proceedings.

In conclusion, the Supreme Court confirmed the admissibility of the private recordings made by one of the participants in the conversation, provided that they respect the principles of proportionality, necessity and authenticity.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 782/2024, de 19 de septiembre. Ponente: Excmo. Sr. D. Leopoldo Puentes Segura. *Asunto: el orden de declaración del acusado y su impacto en el derecho de defensa*

En la STS 782/2024, el Tribunal Supremo analiza si la negativa a permitir que el acusado declare en último lugar vulnera su derecho de defensa, concluyendo que dicha decisión no supone una afectación cuando se ajusta a la normativa procesal vigente y no genera un perjuicio concreto en la estrategia defensiva. Conforme al artículo 701 LECrim, el orden de las pruebas en el juicio oral, incluidas las declaraciones del acusado, puede ser modificado por el presidente del tribunal cuando lo estime necesario para esclarecer los hechos. Aunque permitir al acusado declarar en último lugar puede ser beneficioso para su defensa, no constituye un derecho absoluto, sino una opción sujeta a la discrecionalidad del tribunal.

La Sala Segunda subraya que la denegación de esta solicitud no implica por sí misma una restricción al derecho de defensa, a menos que el recurrente demuestre un perjuicio concreto que haya afectado su capacidad para exponer sus argumentos, controvertir pruebas o ejercer una defensa eficaz. En el caso analizado, el tribunal no halló pruebas de que la estrategia del acusado se viera afectada de manera sustancial. Además, se reitera que el cumplimiento del orden procesal previsto en el artículo 701 LECrim no vulnera derechos fundamentales, salvo en circunstancias excepcionales que justifiquen la necesidad de alterarlo para garantizar la defensa del acusado.

En conclusión, la sentencia refuerza que la facultad de modificar el orden de prueba es discrecional del tribunal y solo resultaría contraria al derecho de defensa si se demostrara un impacto negativo real en la intervención del acusado en el proceso. La correcta aplicación de la normativa procesal y la posibilidad de que el acusado participe activamente en el juicio aseguran el respeto al principio de contradicción y a su derecho de defensa, sin que la alteración del orden de declaración implique, por sí sola, una vulneración constitucional.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 769/2024, de 6 de septiembre. Ponente: Excmo. Sra. Dña. Ana María Ferrer García. *Asunto: Delimitación del “asunto administrativo” en la prevaricación y la ignorancia deliberada en la malversación*

En esta sentencia, el Tribunal Supremo examina el concepto de “asunto administrativo” en el delito de prevaricación (art. 404 CP) y la aplicación de la doctrina de la ignorancia deliberada en la malversación (art. 432 CP). En relación con la prevaricación, la sentencia establece que no toda actuación de una entidad pública o de una empresa con participación pública se enmarca automáticamente en este concepto. Para que una resolución pueda calificarse como prevaricadora, debe referirse a un asunto administrativo, lo que ocurre únicamente en dos supuestos: cuando se actúa bajo una encomienda de gestión o cuando una norma expresa somete la actuación a principios administrativos. En el caso concreto, se determinó que las decisiones sobre contrataciones y retribuciones en una sociedad pública acusada eran actividades regidas por el derecho laboral, no administrativo, impidiendo su calificación como prevaricación.

SUPREME COURT JUDGMENT 782/2024 of 19 September. Reporting Judge: The Honourable Mr Leopoldo Puentes Segura. *Concerning: The order in which the accused testifies and its impact on the right of defence*

In Supreme Court Judgment 782/2024, the Supreme Court analysed whether the refusal to allow an accused to testify last violates their right of defence, concluding that such a decision does not affect the case when it complies with current procedural regulations and does not cause specific harm to the defence strategy. Under Article 701 of the Law of Criminal Procedure, the order of evidence in an oral trial, including the testimony of the accused, can be modified by the presiding judge when he deems it necessary to clarify the facts. Although allowing the accused to testify last may benefit his defence, it is not an absolute right, but an option subject to the discretion of the court.

The Second Chamber stressed that the denial of this request does not in itself amount to a restriction of the right of defence unless the appellant demonstrates specific harm that has affected his or her ability to present arguments, challenge evidence or mount an effective defence. In the case under consideration, the Court found no evidence that the accused’s strategy was substantially affected. Furthermore, the Court reiterated that compliance with the procedural order provided for in Article 701 of the Law of Criminal Procedure does not violate fundamental rights, except in exceptional circumstances that justify the need to alter it to guarantee the accused’s rights of defence.

In conclusion, the judgment reinforces the fact that the power to modify the order of evidence is at the discretion of the court and would only be contrary to the right of defence if a genuine negative impact on the accused’s participation in the proceedings were demonstrated. The correct application of procedural regulations and the possibility for the accused to actively participate in the trial ensure respect for the adversarial principle and the accused’s right of defence, without the alteration of the order of testimony itself amounting to a constitutional violation.

SUPREME COURT JUDGMENT 769/2024 of 6 September. Reporting Judge: The Honourable Ms Ana María Ferrer García. *Concerning: The distinction between an “administrative matter” in the crime of the obstruction of justice and deliberate ignorance in the crime of misappropriation*

In this judgment, the Supreme Court examined the concept of “administrative matter” in the context of the crime of prevarication (Article 404 of the Criminal Code) and the application of the doctrine of deliberate ignorance in the crime of misappropriation (Article 432 of the Criminal Code). Concerning the crime of prevarication, the judgment establishes that not all actions of a public entity or a publicly owned company automatically fall into this category. For a decision to be considered prevarication, it must relate to an administrative matter, which only happens in two cases: when an individual is acting under a management mandate or when an express regulation subjects the action to administrative principles. In this specific case, it was held that the decisions on hiring and remuneration in the public company that was accused were activities governed by labour law, not administrative law, thus preventing it from being classified as prevarication.

Respecto a la malversación, la sentencia aborda la aplicación de la doctrina de la ignorancia deliberada, que se configura cuando un sujeto se coloca voluntariamente en una situación de desconocimiento para eludir la responsabilidad de sus actos, a pesar de tener el deber de conocer sus consecuencias legales. El Tribunal Supremo concluye que los acusados ignoraron deliberadamente las normativas presupuestarias aplicables a la fijación de retribuciones y otros beneficios económicos, lo que constituye un conocimiento doloso suficiente para integrar el tipo penal de malversación. No es necesario que el autor tenga certeza absoluta de la ilegalidad de su conducta, sino que basta con que actúe con conciencia de que está incumpliendo las normas o despreciando los controles que debía observar.

La sentencia también destaca que la disposición irregular de fondos públicos mediante incrementos salariales y beneficios económicos contrarios a la legislación presupuestaria se encuadra dentro de la malversación dolosa. En este sentido, el Tribunal Supremo reitera que los actos de gestión negligente o dolosa de los recursos públicos no pueden ampararse en una supuesta falta de conocimiento, cuando el sujeto tenía la obligación legal de conocer las normas aplicables. Así, se refuerza la exigencia de responsabilidad penal en la administración de fondos públicos, evitando que el desconocimiento intencional se convierta en un mecanismo de impunidad.

En conclusión, la sentencia establece un criterio restrictivo en la prevaricación, limitando la aplicación del concepto de “asunto administrativo” a supuestos claramente vinculados al derecho administrativo. Al mismo tiempo, refuerza que la ignorancia deliberada no puede ser utilizada como excusa en el delito de malversación, asegurando que quienes gestionan fondos públicos no puedan eludir su responsabilidad penal mediante la omisión intencionada del conocimiento de las normas aplicables. Este análisis garantiza la aplicación rigurosa del principio de legalidad penal, evitando interpretaciones expansivas que pudieran generar inseguridad jurídica.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 801/2024, de 25 de septiembre. Ponente: Excm. Sra. D^a. Ana María Ferrer García. *Asunto: Criterios para la segunda acumulación de condenas y su aplicación favorable al reo*

En la STS 801/2024, el Tribunal Supremo analiza los requisitos para la segunda acumulación de condenas conforme al artículo 76 CP, que establece los límites máximos de cumplimiento cuando una persona es condenada por múltiples delitos. La Sala Segunda señala que esta segunda acumulación es posible si concurren dos condiciones: la conexidad temporal, que exige que los delitos hayan sido cometidos dentro de un período que permita su inclusión en un único procedimiento penal; y la favorabilidad para el reo, garantizando que la nueva acumulación resulte más beneficiosa en términos de reducción del tiempo de cumplimiento efectivo.

El fallo también establece que, incluso si algunas de las condenas acumuladas ya han sido cumplidas, deben ser incluidas en la nueva acumulación si cumplen los criterios exigidos. Este criterio busca evitar que decisiones judiciales previas perjudiquen al penado, asegurando una interpretación coherente y equitativa del artículo 76 CP. En el caso concreto, el Tribunal Supremo concluye que el Juzgado de lo Penal excluyó indebidamente condenas previamente acumuladas, por lo que estima parcialmente el recurso

Concerning misappropriation, the judgment addresses the application of the doctrine of deliberate ignorance, which occurs when a subject voluntarily places themselves in a situation of ignorance to avoid liability for their actions, despite having a duty to be aware of the legal consequences. The Supreme Court concluded that the accused deliberately ignored the budgetary regulations applicable to the setting of salaries and other economic benefits, which amounted to intentional ignorance sufficient to qualify as misappropriation. It is not necessary for the offender to be absolutely certain of the illegality of their conduct; it is enough that they act in the knowledge that they are breaking the rules or disregarding the controls that they should be observing.

The judgment also emphasises that the irregular use of public funds through salary increases and financial benefits contrary to budgetary legislation falls within the scope of intentional misappropriation. Thus, the Supreme Court reiterated that acts of negligent or intentional mismanagement of public resources cannot be justified by an apparent lack of knowledge, when the subject had a legal obligation to be aware of the applicable regulations. This reinforces the requirement for criminal liability in the administration of public funds, preventing intentional ignorance from becoming a means of evading punishment.

In conclusion, the judgment establishes a restrictive approach to the crime of prevarication, limiting the application of the concept of “administrative matter” to cases clearly linked to administrative law. At the same time, this judgment reinforces the fact that deliberate ignorance cannot be used as an excuse for the crime of misappropriation, ensuring that those who manage public funds cannot avoid criminal liability through the intentional ignorance of the applicable regulations. This analysis guarantees the rigorous application of the principle of criminal legality, avoiding expansive interpretations that could cause legal uncertainty.

SUPREME COURT JUDGMENT 801/2024 of 25 September. Reporting Judge: The Honourable Ms Ana María Ferrer García. *Concerning: Criteria for the second grouping of criminal convictions and their application in favour of a convicted party*

In Supreme Court Judgment 801/2024, the Supreme Court analysed the requirements for the second grouping of criminal convictions under Article 76 of the Criminal Code, which establishes the maximum limits of compliance when a person is convicted of multiple crimes. The Second Chamber noted that this second grouping is possible if two conditions are met: a temporal connection, which requires the offences to have been committed within a period that allows for their inclusion in a single set of criminal proceedings; and favourability for the convicted person, guaranteeing that the new grouping is more beneficial in terms of reducing the time of effective compliance.

The judgment also establishes that, even if some of the grouped sentences have already been served, they must be included in the new grouping if they meet the required criteria. This approach seeks to prevent previous judgments from prejudicing the convicted person, ensuring a coherent and equitable interpretation of Article 76 of the Criminal Code. In this specific case, the Supreme Court concluded that the Criminal Court had wrongly excluded previously grouped sentences, and,

del penado, ordenando una nueva acumulación que le resulta más favorable.

Esta sentencia refuerza la jurisprudencia sobre la acumulación de condenas, estableciendo que su aplicación debe ser siempre favorable al reo, respetando los requisitos de conexidad temporal y proporcionalidad. Además, se subraya la importancia de evitar interpretaciones restrictivas que puedan generar un cumplimiento más gravoso de lo legalmente previsto, garantizando así la protección de los derechos del condenado y el principio de seguridad jurídica.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 847/2024, de 10 de octubre de 2024. Ponente: Excm. Sra. D^a. Carmen Lamela Díaz. *Asunto: Diferenciación entre unidad de acción y continuidad delictiva*

El Tribunal Supremo, en la STS 847/2024, analiza la distinción entre la unidad de acción y la continuidad delictiva, conceptos clave para la individualización de la responsabilidad penal. La unidad de acción se refiere a una única conducta que genera un resultado delictivo, mientras que la continuidad delictiva, regulada en el artículo 74 CP, se configura cuando existe una pluralidad de actos homogéneos conectados por una intención común y un mismo contexto delictivo. La aplicación de esta figura permite considerar dichos actos como un solo delito continuado, imponiendo una pena agravada proporcional a la reiteración de la conducta.

En el caso concreto, se discutía si las diversas condenas impuestas al penado podían ser consideradas como un delito continuado en lugar de delitos autónomos. El Tribunal aclara que, para aplicar la continuidad delictiva, deben concurrir un nexo subjetivo (unidad de propósito) y un nexo objetivo (homogeneidad de los hechos y proximidad temporal). Al no cumplirse estos requisitos, se concluyó que las condenas correspondían a delitos independientes, sin la conexión necesaria para su calificación como delito continuado.

El fallo destaca que la continuidad delictiva no puede extenderse de manera automática para agrupar delitos separados en el tiempo o con características distintas, pues ello desnaturalizaría la función del artículo 74 CP. Asimismo, enfatiza que la acumulación de condenas, prevista en el artículo 76 CP, opera de manera independiente y no afecta la calificación de los delitos. Con esta resolución, el Tribunal reafirma la importancia de respetar los principios de legalidad y proporcionalidad en la imposición de penas.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 834/2024, del 7 de octubre. Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. *Asunto: Prueba indiciaria y alevosía en el delito de asesinato*

En la STS 834/2024, el Tribunal Supremo analiza dos aspectos fundamentales en el proceso penal: los requisitos de la prueba indiciaria y la configuración de la alevosía en el delito de asesinato. Respecto a la prueba indiciaria, el Tribunal reitera su plena admisibilidad siempre que cumpla con criterios estrictos, como la existencia de indicios acreditados mediante prueba directa, la pluralidad e independencia de los mismos, su concordancia en la conclusión a la que conducen, la racionalidad del proceso deductivo y la necesidad de una motivación explícita en la resolución judicial. Estos requisitos garantizan que la inferencia judicial no

therefore, partially upheld the defendant's appeal, ordering a new grouping that was more favourable to him.

This judgment confirms the case law on the grouping of sentences, establishing that its application must always be favourable to the defendant, respecting the requirements of temporal connection and proportionality. Furthermore, it emphasises the importance of avoiding restrictive interpretations that could make compliance more burdensome than legally required, thus guaranteeing the protection of the convicted person's rights and the principle of legal certainty.

SUPREME COURT JUDGMENT 847/2024 of 10 October 2024. Reporting Judge: The Honourable Ms Carmen Lamela Díaz. *Concerning: The distinction between unity of action and criminal continuity*

In Judgment 847/2024, the Supreme Court analysed the distinction between unity of action and criminal continuity, key concepts for the individualisation of criminal liability. Unity of action refers to a single act that produces a criminal result, while criminal continuity, governed by Article 74 of the Criminal Code, is defined as the existence of a number of similar acts connected by a common intention and the same criminal context. The application of this concept makes it possible to treat such acts as a single continuing offence, imposing an aggravated penalty proportional to the repetition of the conduct.

In this particular case, there was a debate as to whether the various sentences imposed on the offender could be considered a continuous offence rather than separate offences. The Court clarified that to apply the concept of criminal continuity, there must be a subjective link (unity of purpose) and an objective link (homogeneity of the acts and temporal proximity). As these requirements were not met, the Court concluded that the convictions corresponded to separate offences, without the connection necessary for them to be classified as a continuous offence.

The judgment emphasises that criminal continuity cannot be automatically extended to group together offences that are temporally separate or have different characteristics, as this would distort the function of Article 74 of the Criminal Code. Similarly, it emphasises that the grouping of convictions, provided for in Article 76 of the Criminal Code, operates independently and does not affect the classification of the offences. With this judgment, the Supreme Court reaffirms the importance of respecting the principles of legality and proportionality in the imposition of criminal sanctions.

SUPREME COURT JUDGMENT 834/2024 of 7 October. Reporting Judge: The Honourable Mr Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. *Concerning: Circumstantial evidence and malice aforethought in the crime of murder*

In Supreme Court Judgment 834/2024, the Supreme Court analysed two fundamental aspects of criminal proceedings: the requirements of circumstantial evidence and the definition of malice aforethought in the crime of murder. Regarding circumstantial evidence, the Court reiterated that it is fully admissible provided that it meets strict criteria, such as the existence of circumstantial evidence supported by direct evidence, the existence of multiple pieces of independent evidence, the consistency of the evidence in the conclusion to which it leads, the rationality of the deductive

sea arbitraria ni dependa de cadenas de deducciones especulativas, asegurando así la validez de la prueba en la determinación de la culpabilidad.

En cuanto a la alevosía, la Sala Segunda establece que esta circunstancia agravante se configura cuando el agresor actúa de manera que elimina cualquier posibilidad de defensa por parte de la víctima, asegurando el éxito de su acción. La alevosía puede presentarse en diversas formas, pero siempre requiere la utilización deliberada de medios que garanticen la indefensión del atacado. En el caso concreto, se determinó que los acusados actuaron con premeditación, utilizando armas altamente lesivas y ejecutando un ataque sorpresivo e indiscriminado contra víctimas indefensas. Estos elementos fueron esenciales para calificar los hechos como asesinato con alevosía.

El fallo reafirma que la prueba indiciaria, cuando está correctamente fundamentada y respaldada por indicios plurales y concordantes, posee plena eficacia probatoria en el proceso penal. Asimismo, la sentencia delimita con precisión el alcance de la alevosía como elemento agravante, vinculándola a la eliminación de cualquier posibilidad de defensa y a la garantía de éxito del ataque.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 889/2024 de 23 de octubre. Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta. *Asunto: Acceso empresarial a herramientas digitales y delito contra la intimidad*

El Tribunal Supremo, en la STS 889/2024, analiza nuevamente los límites del acceso de los empleadores a las herramientas informáticas de los trabajadores y su posible incidencia en el delito contra la intimidad del artículo 197 del CP. El caso se centra en una empresa que accedió a los correos electrónicos corporativos de tres empleados, alegando razones laborales. El Tribunal subraya que, aunque los equipos informáticos sean propiedad de la empresa, los trabajadores conservan su derecho a la intimidad en el uso de los medios digitales, conforme al artículo 18 de la Constitución y el artículo 20 *bis* del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, este derecho puede estar sujeto a restricciones si se establecen previamente y se comunican de manera clara.

En el caso concreto, quedó acreditado que los empleados habían sido informados sobre las limitaciones en el uso de los dispositivos y que los correos electrónicos corporativos estaban destinados exclusivamente a fines laborales. Además, firmaron documentos reconociendo estas condiciones, lo que redujo su expectativa legítima de privacidad. La Sala Segunda destaca que la existencia de normas claras y la advertencia previa por parte del empleador son elementos esenciales para evaluar la legitimidad de cualquier acceso empresarial a la información de los trabajadores.

El Supremo examina si el acceso de por parte del empleador constituía un apoderamiento ilícito de información privada, conforme a los requisitos del artículo 197 CP. Concluye que no se vulneró el derecho a la intimidad, ya que el acceso no tuvo un propósito intencionado de apropiarse de datos personales ni de vulnerar la privacidad de los empleados. La revisión de los correos electrónicos se realizó en el marco de una copia de seguridad debido a un problema técnico y con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas laborales, sin que se extrajera información ajena a estos fines.

process and the need for explicit reasoning in the court's decision. These requirements ensure that the judicial inference is neither arbitrary nor dependent on chains of speculative deductions, thus ensuring the validity of the evidence in determining guilt.

Regarding the aggravating circumstance of malice aforethought, the Second Chamber established that this circumstance is present when an aggressor acts in a way that eliminates any possibility of defence by the victim, ensuring the success of their action. Malice aforethought can take various forms but always requires the deliberate use of means to guarantee the defencelessness of the victim. In this specific case, it was determined that the accused acted with premeditation, using highly harmful weapons and carrying out a surprise and indiscriminate attack against defenceless victims. These elements were essential to classify the facts as murder with malice aforethought.

The judgment reaffirms that circumstantial evidence, when correctly substantiated and supported by multiple and consistent indicators, has full probative value in criminal proceedings. The judgment also precisely defines the scope of an aggravating factor, linking it to the elimination of any possibility of defence and the guarantee of the success of the attack.

SUPREME COURT JUDGMENT 889/2024 of 23 October. Reporting Judge: The Honourable Mr Andrés Martínez Arrieta. *Concerning: Corporate access to digital tools and crimes against privacy*

In Judgment 889/2024, the Supreme Court once again analysed the limits of employers' access to employees' computer tools and their possible impact on the crime against privacy under Article 197 of the Criminal Code. The case centred on a company that accessed the corporate emails of three employees, citing work-related reasons. The Court held that, although the computer equipment is the property of the company, employees retain their right to privacy in the use of digital media, under Article 18 of the Spanish Constitution and Article 20 *bis* of the Workers' Statute. However, this right may be subject to restrictions if they are established in advance and clearly communicated.

In the case at hand, it was established that the employees had been informed about the limitations on the use of the devices and that the corporate emails were intended for work purposes only. Moreover, the employees signed documents acknowledging these conditions, which reduced their legitimate expectation of privacy. The Second Chamber held that the existence of clear rules and a prior warning by the employer are essential elements in assessing the legitimacy of any employer's access to employees' information.

The Supreme Court examined whether the employer's access constituted an unlawful seizure of private information, under Article 197 of the Criminal Code. It concluded that the right to privacy was not violated, as the access did not have an intentional purpose of appropriating personal data or violating the privacy of the employees. The review of the emails was carried out as part of a backup due to a technical problem and for the purpose of verifying compliance with employment standards, without extracting extraneous information.

En su fallo, el Tribunal Supremo refuerza la necesidad de aplicar criterios de proporcionalidad, necesidad y mínima invasión cuando los empleadores acceden a información de los trabajadores. La ausencia de contraseñas personales en los correos electrónicos y la comunicación previa de las normas laborales fueron factores clave para desestimar la existencia de un delito contra la intimidad. Finalmente, el Tribunal ratifica la absolución de la empresaria, subrayando que el control empresarial de los medios digitales debe respetar los derechos fundamentales, pero también puede ejercerse legítimamente bajo estándares claros y previsibles.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 974/2024 de 6 de noviembre. Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz. Asunto: Validez de las diligencias acordadas dentro del plazo de instrucción.

En la STS 974/2024, la Sala Segunda analiza la aplicación del plazo de instrucción previsto en el artículo 324 LECrim y el concepto de “*diligencia acordada antes del vencimiento del plazo de instrucción*”. El caso surge en el contexto de una investigación por delitos fiscales, en la que se cuestionó la validez de diversas actuaciones realizadas tras la expiración formal del plazo de instrucción. El Tribunal reitera que este plazo es preclusivo, por lo que, una vez vencido, no pueden acordarse nuevas diligencias salvo prórroga aprobada en tiempo y forma. Sin embargo, precisa que las diligencias que fueron acordadas dentro del plazo, aunque ejecutadas posteriormente, siguen siendo válidas.

La Sala Segunda define “*diligencia acordada*” como toda decisión judicial emitida dentro del plazo que ordene una actuación concreta para el desarrollo de la investigación. Este criterio permite diferenciar entre la admisión legítima de pruebas solicitadas en tiempo y actuaciones extemporáneas que vulnerarían la finalidad del artículo 324 LECrim. En el caso analizado, se concluyó que los informes presentados por la Agencia Tributaria tras el vencimiento del plazo de instrucción eran válidos, dado que su realización había sido formalmente requerida dentro del período establecido.

Asimismo, el Tribunal subraya que el propósito del artículo 324 LECrim es evitar dilaciones indebidas y agilizar la instrucción, pero no debe utilizarse para invalidar pruebas o actuaciones aprobadas correctamente dentro del plazo. En este sentido, la sentencia rechaza la idea de que la incorporación de informes periciales o la citación de investigados después del vencimiento implique una vulneración procesal, siempre que dichas diligencias estuvieran previamente acordadas.

En conclusión, la sentencia establece un criterio claro para la interpretación del plazo de instrucción, asegurando un equilibrio entre la celeridad procesal y la validez de actuaciones previamente aprobadas. Este enfoque busca garantizar los derechos procesales de las partes sin afectar la integridad de la investigación penal, reforzando así la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la normativa procesal.

In its judgment, the Supreme Court stressed the need to apply criteria of proportionality, necessity and minimum invasiveness when employers access employees’ information. The absence of personal passwords in the emails and the prior communication of work rules were key factors in dismissing the existence of a privacy offence. Ultimately, the Court upheld the acquittal of the business owner, stressing that corporate control of digital media must respect fundamental rights, but can also be legitimately exercised in accordance with clear and predictable standards.

SUPREME COURT JUDGMENT 974/2024 of 6 November. Reporting Judge: The Honourable Mr Eduardo de Porres Ortiz. Concerning: Validity of the proceedings agreed within the pre-trial investigation period.

In Supreme Court Judgment 974/2024, the Second Chamber analysed the application of the investigation period provided for in Article 324 of the Law of Criminal Procedure and the concept of “*proceedings agreed before the expiry of the investigation period*”. The case arose in the context of an investigation into tax offences, in which the validity of various actions carried out after the formal expiry of the investigation period was questioned. The Court held that this time limit was preclusive, meaning that, once it expired, no further proceedings could be issued unless an extension was approved in due time and form. However, the Court noted that proceedings that were agreed upon within the time limit, even if executed later, remained valid.

The Second Chamber defined “*agreed proceedings*” as any judicial decision issued within the time limit ordering a specific action for the carrying out of the investigation. This approach makes it possible to differentiate between the legitimate admission of evidence requested in time and out-of-time actions that would violate the purpose of Article 324 of the Law of Criminal Proceedings. In the case in question, it was concluded that the reports submitted by the Tax Agency after the expiry of the investigation period were valid, given that they had been formally requested within the established period.

Furthermore, the Court stressed that the purpose of Article 324 of the Law of Criminal Procedure is to avoid undue delay and to expedite the investigation, but it should not be used to invalidate evidence or proceedings that were properly approved within the limitation period. Thus, the Court rejected the idea that the incorporation of expert reports or the summoning of investigated persons after the expiry of the limitation period entails a procedural violation, as long as such proceedings were previously agreed upon.

In conclusion, the judgment establishes a clear approach for the interpretation of the investigation period, ensuring a balance between procedural speed and the validity of previously approved proceedings. This approach seeks to guarantee the procedural rights of the parties without affecting the integrity of the criminal investigation, thus reinforcing legal certainty and the correct application of procedural law.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1012/2024 de 13 de noviembre. Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta. **Asunto: Definición y características del error de prohibición**

En la STS 1012/2024, el Tribunal Supremo analiza el concepto de error de prohibición, diferenciando sus formas y aplicándolo al caso concreto. El error de prohibición se presenta cuando el sujeto desconoce que su conducta está prohibida por el derecho penal o cree que, en su caso, está justificada o permitida. Puede ser directo, cuando se desconoce la norma en su totalidad, o indirecto, cuando el sujeto conoce la existencia de la norma, pero interpreta erróneamente que su conducta no está prohibida. En ambos casos, el error debe ser evaluado como vencible o invencible según las circunstancias objetivas y subjetivas.

En el caso concreto, el acusado actuó en la creencia de que la actividad desarrollada en su asociación no contravenía la norma penal, apoyándose en la inscripción oficial de la asociación y en la asesoría de un abogado. Sin embargo, el Tribunal determinó que este error era vencible, ya que el acusado podía haber accedido a información suficiente para disipar las dudas sobre la legalidad de su actividad. La sentencia señala que el análisis de la vencibilidad del error se basa en la naturaleza de la conducta, el acceso del sujeto a información confiable y la claridad de la normativa aplicable. En este caso, la actividad desarrollada (promoción y distribución de cannabis) era claramente contraria al ordenamiento penal, y el acusado tenía la posibilidad de obtener asesoramiento jurídico que confirmara su ilicitud.

El Tribunal resalta que el error de prohibición vencible no excluye la responsabilidad penal, pero permite una reducción de la pena en función de su grado. Esto se justifica porque, aunque el sujeto actúe bajo una creencia errónea, dicha creencia no elimina totalmente su culpabilidad. En este sentido, se aplicó una atenuante basada en el artículo 14.1 CP, pero se mantuvo la condena por un delito contra la salud pública en atención a la gravedad de los hechos y al impacto social de la conducta.

La sentencia subraya la importancia de evaluar el error de prohibición bajo un estándar objetivo, atendiendo a la disponibilidad de información accesible y comprensible para cualquier ciudadano. Este criterio busca equilibrar la protección del ordenamiento jurídico con la capacidad del sujeto para conocer y cumplir las normas, garantizando una aplicación proporcional y razonable del derecho penal. La resolución establece un marco claro para la interpretación de este elemento subjetivo, reforzando la previsibilidad y la seguridad jurídica en casos similares.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1033/2024 de 14 de noviembre. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García. **Asunto: La interrupción de la prescripción por medio de providencia**

En la STS 1033/2024, el Tribunal Supremo analiza el efecto interruptor de la prescripción en el proceso penal y determina que una providencia dictada dentro del procedimiento puede interrumpir el cómputo del plazo, siempre que no se trate de una mera formalidad procesal. Para que la interrupción sea válida, la providencia debe estar motivada y referirse a una actuación relevante dentro de la instrucción o el enjuiciamiento, evidenciando un impulso

SUPREME COURT JUDGMENT 1012/2024 of 13 November. Reporting Judge: The Honourable Mr Andrés Martínez Arrieta. **Concerning: Definition and characteristics of a mistake as to the unlawfulness of an act (error de prohibición).**

In Supreme Court Judgment 1012/2024, the Supreme Court analysed the concept of a mistake as to the unlawfulness of an act (*error de prohibición*), differentiating its forms and applying it to the specific case. A mistake as to the unlawfulness of an act occurs when a person is unaware that their conduct is prohibited by criminal law or believes that, in their case, it is justified or permitted. It can be direct, when the law as a whole is unknown, or indirect when a person is aware of the law but mistakenly believes that their conduct is not prohibited. In both cases, the error must be evaluated as one that can be remedied (*vencible*) or one that cannot be remedied (*invencible*) according to the objective and subjective circumstances.

In this particular case, the accused acted in the belief that the activity carried out in his association did not contravene criminal law, based on the association's official registration and the advice of a lawyer. However, the Court determined that this error could be remedied, as the accused could have accessed sufficient information to dispel doubts about the legality of his activity. The judgment states that the analysis of the excusability of the error is based on the nature of the conduct, the subject's access to reliable information, and the clarity of the applicable regulations. In this case, the activity carried out (promotion and distribution of cannabis) was clearly contrary to criminal law, and the accused had access to legal advice to confirm its illegality.

The Court held that a mistake as to the unlawfulness of an act which can be corrected does not preclude a finding of criminal liability, but allows for a reduction in the sentence depending on the degree of the mistake. This is justified because, even if the subject acts under a mistaken belief, that belief does not totally eliminate their culpability. Thus, a mitigating factor was applied based on Article 14.1 of the Criminal Code, but the conviction for a crime against public health was upheld in view of the seriousness of the facts and the social impact of the behaviour.

The judgment underlines the importance of evaluating a mistake as to the unlawfulness of an act under an objective standard, taking into account the availability of information that is accessible and comprehensible to any citizen. This approach seeks to balance the protection of the legal system with the subject's ability to know and comply with the rules, guaranteeing a proportional and reasonable application of criminal law. The judgment establishes a clear framework for the interpretation of this subjective element, reinforcing predictability and legal certainty in similar cases.

SUPREME COURT JUDGMENT 1033/2024 of 14 November. Reporting Judge: The Honourable Mr Antonio del Moral García. **Concerning: The interruption of a limitation period due to a court order**

In Supreme Court Judgment 1033/2024, the Supreme Court analysed the interrupting effect of the limitation period in criminal proceedings and held that an order issued within the proceedings may interrupt the calculation of the limitation period, provided that it is not a mere procedural formality. For the interruption to be valid, the order must be well-founded and refer to a significant step within the investigation or trial, evidencing a real procedural impetus

procesal real que contribuya a la resolución del caso. De este modo, se refuerza la exigencia de que la interrupción de la prescripción no se base en resoluciones automáticas sin contenido sustancial.

El Tribunal subraya que la interrupción de la prescripción debe interpretarse de manera coherente con el principio de seguridad jurídica, evitando que se prolongue injustificadamente la incertidumbre sobre la situación jurídica del acusado. En el caso concreto, se validó la interrupción del plazo porque la providencia impugnada ordenó una diligencia de investigación específica antes del vencimiento del plazo de prescripción. Además, la sentencia reconoce que este efecto interruptor no solo afecta al delito directamente relacionado con la diligencia acordada, sino que puede extenderse a otros ilícitos conexos investigados en el mismo procedimiento.

El fallo concluye que la interrupción de la prescripción debe garantizar tanto la eficacia en la persecución penal como el respeto a los derechos fundamentales del acusado, en particular su derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. Para ello, exige un control riguroso sobre la naturaleza y finalidad de las providencias que interrumpen la prescripción, asegurando que exista una conexión clara entre la diligencia acordada y los fines del procedimiento penal.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 298/2024 de 8 de abril.
Ponente: Excmo. Sr. D Antonio del Moral García. **Asunto:**
Delimitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el principio de beneficio corporativo

La Sentencia del Tribunal Supremo 298/2024 establece un criterio fundamental sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en particular en relación con delitos tributarios y de falsedad documental. Uno de los aspectos más relevantes es que el Tribunal revoca la condena de las empresas implicadas al no cumplirse los requisitos esenciales del artículo 31 *bis* del Código Penal, que exige que el delito haya sido cometido en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. En este caso, el Supremo concluye que no se acredita que las sociedades obtuvieran un provecho real del fraude fiscal, lo que marca un límite importante en la extensión de la responsabilidad empresarial.

Otro aspecto clave de la sentencia es la diferenciación entre la responsabilidad de las personas físicas y la de las personas jurídicas. Si bien se confirma la condena de los administradores y directivos de las empresas, la Sala Segunda recalca que la mera actuación ilícita de un directivo no implica automáticamente la responsabilidad de la empresa, salvo que se pruebe que esta se benefició directamente del delito o que el fraude era parte de su operativa habitual. Este principio refuerza la exigencia de un análisis individualizado en cada caso, evitando la aplicación mecánica de la responsabilidad penal corporativa.

La sentencia también aborda la relevancia del *compliance* penal en la defensa de las empresas, si bien en este caso no fue determinante para la absolución. Aunque las empresas condenadas no contaban con modelos de prevención de delitos, el Tribunal Supremo insiste en que su ausencia no es suficiente para fundamentar una condena si no se acredita la vinculación de la empresa con la actividad delictiva. Esto refuerza la idea de que, si bien el *compliance* es una herramienta clave para la exoneración de responsabilidad, su inexistencia no puede ser el único criterio para condenar a una persona jurídica.

that contributes to the resolution of the case. This reinforces the requirement that the interruption of the limitation period should not be based on automatic rulings without substantial content.

The Court stressed that the interruption of the limitation period must be interpreted in a manner consistent with the principle of legal certainty, thus avoiding a situation in which the uncertainty about the legal situation of the accused is unjustifiably prolonged. In this particular case, the interruption of the limitation period was upheld because the contested order had ordered a specific investigation before the expiry of the limitation period. Furthermore, the Court recognised that this interruption not only affected the crime directly related to the agreed measure but could also affect other related crimes investigated in the same proceedings.

The Court concluded that the interruption of the limitation period must guarantee both the effectiveness of the criminal prosecution and respect for the fundamental rights of the accused, in particular, their right to a trial without undue delay. Therefore, this requires rigorous control over the nature and purpose of the orders that interrupt the limitation period, ensuring that there is a clear connection between the agreed measure and the purpose of the criminal proceedings.

SUPREME COURT JUDGMENT 298/2024 of 8 April. Reporting Judge: The Honourable Mr Antonio del Moral García. **Concerning:** ***Defining the criminal liability of legal persons and the principle of corporate benefit***

Supreme Court Judgment 298/2024 establishes a fundamental approach to the criminal liability of legal persons, particularly regarding tax offences and document forgery. One of the most relevant aspects is that the Court overturned the convictions of the companies involved due to the failure to meet the essential requirements of Article 31 *bis* of the Criminal Code, which requires that the offence be committed for the direct or indirect benefit of the legal person in question. In this case, the Supreme Court held that it had not been proven that the companies obtained any real benefit from the tax fraud, which places an important limitation on the scope of corporate liability.

Another key aspect of the judgment is the differentiation between the liability of natural persons and that of legal persons. Although the conviction of the directors and executives of the companies was upheld, the Second Chamber emphasised that the mere unlawful action of an executive does not automatically entail the liability of the company, unless it is proven that the company benefited directly from the crime or that the fraud was part of its usual operations. This principle reinforces the requirement for an individualised analysis in each case, avoiding the mechanical application of corporate criminal liability.

The judgment also addresses the relevance of criminal compliance in the defence of companies, although in this case, it was not a decisive factor for the acquittal. Although the companies in question did not have crime prevention models, the Supreme Court stated that their absence was not sufficient to justify a conviction if the company's link to criminal activity was not proven. This supports the idea that, although compliance is a key tool for exoneration from liability, its absence cannot be the only criterion for convicting a legal person.

Por último, el fallo resalta el principio de *non bis in idem*, es decir, la prohibición de castigar dos veces por los mismos hechos. En el caso de la persona jurídica, el Tribunal advierte que sus dos socios mayoritarios ya habían sido condenados, por lo que imponer una sanción adicional a la empresa habría supuesto una duplicidad punitiva injustificada. Este criterio refuerza la idea de que la responsabilidad penal de las empresas debe ser autónoma y no puede utilizarse para agravar de manera artificial la condena de sus socios o administradores. Con ello, la STS 1932/2024 consolida un marco más garantista en la imputación de las personas jurídicas, evitando que su responsabilidad se imponga sin una base probatoria sólida.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 352/2024 de 30 de abril. Ponente: Excmo. Sr. D Vicente Magro Servet. **Asunto: Responsabilidad penal de la persona jurídica y el control del fraude empresarial**

La STS 352/2024 es relevante porque reafirma la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo que las empresas pueden ser condenadas cuando sus estructuras son utilizadas para cometer delitos. En este caso, la persona jurídica y la persona física fueron declaradas coautoras del delito de insolvencia punible, ya que participaron en la descapitalización fraudulenta de otra empresa del grupo, afectando a sus acreedores. La sentencia enfatiza que una empresa no puede escudarse en su personalidad jurídica si se demuestra que ha servido como instrumento para la comisión de fraudes, lo que refuerza la importancia de contar con mecanismos efectivos de control y transparencia en la gestión empresarial.

Otro punto clave es la aplicación del artículo 31 *bis* del Código Penal, que establece la responsabilidad de las empresas cuando no implementan medidas para prevenir delitos dentro de su estructura. En este caso, el Tribunal Supremo analizó cómo las empresas acusadas no actuaban con independencia, sino que estaban bajo el control de su administrador, quien utilizó su entramado societario para ocultar la situación financiera real, manipular las cuentas y defraudar a terceros. Esto demuestra que el Tribunal no solo examina la forma legal de la empresa, sino su operativa real, lo que refuerza la necesidad de programas de *compliance* penal para evitar este tipo de responsabilidades.

Finalmente, la sentencia establece un precedente clave al confirmar que las personas jurídicas pueden ser coautoras de delitos económicos si participan activamente o no evitan su comisión. La imposición de multas y la nulidad de actos jurídicos fraudulentos refuerzan la función disuasoria del derecho penal en el ámbito empresarial. Con ello, se deja claro que las empresas deben garantizar una gestión transparente y ética, implementando controles internos adecuados para evitar su implicación en delitos cometidos por sus administradores o socios.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1182/2024 de 7 de enero de 2025. Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez. **Asunto: Límites a la investigación tributaria: nulidad de actuaciones tras la prescripción administrativa**

En la STS 1182/2024, el Tribunal Supremo aborda la cuestión de la validez de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Administración Tributaria una vez prescrita

Finally, the judgment emphasises the principle of *non bis in idem*, i.e. the prohibition against double jeopardy. In the case of the company, the Court noted that its two majority shareholders had already been convicted, so imposing an additional penalty on the company would have been an unjustified duplication of punishment. This approach reinforces the idea that the criminal liability of companies should be autonomous and cannot be used to artificially increase the penalty imposed on its partners or directors. As a result, Supreme Court Judgment 1932/2024 establishes a more rights-based framework for the prosecution of legal persons, preventing their liability from being imposed without a solid evidentiary basis.

SUPREME COURT JUDGMENT 352/2024 of 30 April. Reporting Judge: The Honourable Mr Vicente Magro Servet. **Concerning: Criminal liability of a legal person and the control of corporate fraud**

Supreme Court Judgment 352/2024 is significant because it reaffirms the criminal liability of legal persons, establishing that companies can be convicted when their organisational structures are used to commit crimes. In this case, a legal person and a natural person were declared co-authors of the crime of criminal insolvency, as they participated in the fraudulent decapitalisation of another company in the group, affecting its creditors. The judgment emphasises that a company cannot hide behind its legal personality if it is proven to have been used as an instrument for committing fraud, which reinforces the importance of having effective mechanisms for control and transparency in business management.

Another key point is the application of Article 31 *bis* of the Criminal Code, which establishes the liability of companies when they do not implement measures to prevent crimes within their organisational structure. In this case, the Supreme Court analysed how the companies in question did not act independently but were under the control of their director, who used their corporate structure to hide the real financial situation, manipulate the accounts and defraud third parties. This shows that the Court not only examined the legal form of the company but also its real operations, reinforcing the need for criminal compliance programmes to avoid this type of liability.

Finally, the judgment sets a key precedent by confirming that legal persons can be co-authors of economic crimes if they actively participate in or fail to prevent their commission. The imposition of fines and the nullity of fraudulent legal acts reinforce the deterrent function of criminal law in business. This makes it clear that companies must guarantee transparent and ethical management, implementing adequate internal controls to avoid their involvement in crimes committed by their directors or partners.

SUPREME COURT JUDGMENT 1182/2024 of 7 January 2025. Reporting Judge: The Honourable Mr Manuel Marchena Gómez. **Concerning: Limits to tax investigations: nullity of procedures after the administrative limitation period**

In Supreme Court Judgment 1182/2024, the Supreme Court addressed the question of the validity of the verification and investigation procedures carried out by the Tax Administration

la deuda fiscal, pero dentro del plazo de prescripción penal del delito contra la Hacienda Pública. La sentencia reafirma que la prescripción administrativa de la deuda tributaria, fijada en cuatro años según el artículo 66 LGT, impide a la Agencia Tributaria determinar la deuda y liquidarla, pero no habilita automáticamente la apertura de una investigación con fines penales. En este caso, se había iniciado un procedimiento de comprobación tributaria respecto a ejercicios ya prescritos, lo que generó un conflicto sobre la validez de los informes emitidos y su posible efecto probatorio en la jurisdicción penal.

El Tribunal Supremo concluye que la Administración Tributaria no puede realizar actuaciones de investigación sobre ejercicios prescritos con el único propósito de derivar responsabilidad penal, salvo que tales indagaciones se enmarquen en los supuestos expresamente autorizados en los artículos 66 *bis* y 115 de la LGT. En este sentido, la sentencia enfatiza que la finalidad del artículo 115 LGT es permitir comprobaciones únicamente en la medida en que resulten necesarias para la fiscalización de períodos no prescritos, pero no como un instrumento para reabrir investigaciones sobre impuestos ya extinguidos. El fallo recalca que la utilización de una inspección tributaria sobre bases prescritas para justificar una denuncia penal es un uso desviado de la potestad administrativa, lo que vulnera los principios de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y legalidad procesal (art. 24 CE).

En consecuencia, el Tribunal Supremo declara la nulidad de las investigaciones tributarias llevadas a cabo una vez prescrita la deuda tributaria en sede administrativa, impidiendo que tales actuaciones sirvan de base probatoria para sustentar una acusación penal. Con esta decisión, la Sala Segunda refuerza la delimitación de competencias entre el ámbito administrativo y penal, estableciendo que el transcurso del plazo de prescripción tributaria impide nuevas actuaciones inspectoras con el único objetivo de fundamentar un proceso penal, garantizando así los derechos del contribuyente y evitando que la Administración utilice sus facultades de comprobación como una vía para eludir los efectos de la prescripción.

AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO, CAUSA ESPECIAL NÚM.: 21248/2024, de 9 de julio de 2024. Ponente: Excm. Sra. D^{ña}. Susana Polo García. *Asunto: El carácter preclusivo de los plazos de instrucción y sus consecuencias en la validez de las diligencias investigativas*

El Auto de archivo de la Causa Especial 21248/2023 resalta la importancia del cumplimiento de los plazos de instrucción establecidos en el artículo 324 de la LECrim, consolidando la doctrina sobre su carácter preclusivo. El archivo se produce como consecuencia del auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional (n^o 365/2024 de 08/07/2024), que revocó una prórroga de los plazos de instrucción y declaró inválidas las diligencias practicadas después del 29 de julio de 2021. El núcleo del auto radica en la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrím), que regula los plazos procesales de la instrucción y determina su duración máxima. La resolución destaca la importancia del cumplimiento estricto de estos plazos, pues la invalidez de diligencias extemporáneas impide su valoración para la prosecución del procedimiento, lo que derivó en el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. Esto refuerza el principio de seguridad jurídica, evitando que las investigaciones se prolonguen indefinidamente y protegiendo el derecho de los investigados a un proceso con límites temporales claros.

once a tax debt is time-barred, but still within the criminal limitation period for offences against the Public Treasury. The judgment reaffirms that the administrative limitation period for tax debts, set at four years under Article 66 of the General Taxation Law, prevents the Tax Agency from establishing the debt and settling it, but does not automatically enable the opening of a criminal investigation. In this case, a tax verification procedure had been initiated with respect to financial years that were already time-barred, which created a conflict over the validity of the reports issued and their possible probative effect in criminal matters.

The Supreme Court found that the Tax Administration cannot carry out investigations into time-barred tax years for the sole purpose of establishing criminal liability unless such investigations fall within the cases expressly authorised by Articles 66 *bis* and 115 of the General Taxation Law. Thus, the judgment emphasises that the purpose of Article 115 of the General Taxation Law is to allow checks only to the extent that they are necessary for the auditing of periods that are not time-barred, but not as an instrument for reopening investigations into taxes that have already become time-barred. The judgment emphasises that the use of a tax inspection on a time-barred basis to justify a criminal charge is a misuse of administrative power, which violates the principles of legal certainty (Article 9.3 of the Spanish Constitution) and procedural legality (Article 24 of the Spanish Constitution).

Consequently, the Supreme Court declared the nullity of tax investigations carried out once the tax debt has been prescribed in administrative proceedings, preventing such actions from serving as evidence to support a criminal charge. With this decision, the Second Chamber has reinforced the boundary between administrative and criminal powers, establishing that the expiry of the tax limitation period prevents new inspection procedures with the sole objective of substantiating criminal proceedings, thus guaranteeing the rights of the taxpayer and preventing the Administration from using its powers of verification as a way of circumventing the effects of the limitation period.

SUPREME COURT ORDER, SPECIAL CASE NO. 21248/2024 of 9 July 2024. Reporting Judge: The Honourable Ms Susana Polo García. *Concerning: The preclusive nature of the investigation periods and their consequences on the validity of the investigative proceedings*

The Order to close Special Case 21248/2023 highlights the importance of complying with the time limits established in Article 324 of the Law of Criminal Procedure, consolidating the case law on its preclusive nature. The case was closed as a result of the order of the Third Section of the National High Court (No. 365/2024 of 08/07/2024), which revoked an extension of the investigation deadlines and declared the proceedings carried out after 29 July 2021 invalid. The essence of the order lies in the application of Article 324 of the Law of Criminal Procedure, which regulates the procedural deadlines of an investigation and sets its maximum duration. The decision highlights the importance of strict compliance with these deadlines, as the invalidity of time-barred actions prevents their assessment for the continuation of the proceedings, which led to the provisional dismissal and archiving of the case. This reinforces the principle of legal certainty, preventing investigations from dragging on indefinitely and protecting the right of those under investigation to a process with clear time limits.

Otro aspecto clave del Auto es la definición del momento en que comienza a computarse el plazo de instrucción. El Tribunal Supremo reafirma que la fecha de inicio se corresponde con la incoación de las diligencias previas por parte del juzgado instructor, y no con la elevación de la causa a la Sala de lo Penal. Esta interpretación refuerza la exigencia de un control estricto sobre el tiempo de duración de la fase de investigación y obliga a los órganos judiciales a actuar con mayor diligencia para evitar que una instrucción extemporánea derive en la inutilización de pruebas fundamentales para el proceso penal.

Finalmente, la resolución tiene un impacto procesal relevante, ya que establece un precedente sobre los efectos de las prórogas de instrucción mal fundamentadas. El auto enfatiza que la prórroga de los plazos debe ser expresa, motivada y acordada dentro del plazo inicial, ya que, de lo contrario, cualquier diligencia posterior será declarada nula. Con ello, se protege el derecho de los investigados a un procedimiento penal que respete principios fundamentales como la seguridad jurídica, el derecho de defensa y el debido proceso. Además, deja claro que los errores en la gestión procesal pueden llevar al archivo de causas incluso en casos de gran relevancia pública, lo que resalta la necesidad de que las fiscalías y los juzgados cumplan con estrictos estándares procesales.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 183/2024, de 29 de febrero, Ponente: Excm. Sra. D^a. Carmen Lamela Díaz. *Asunto: Ampliación del concepto de dato informático y su impacto en la persecución de delitos informáticos*

El análisis de la Sentencia 183/2024 del Tribunal Supremo en relación con el concepto de dato informático es relevante porque clarifica el alcance de los delitos informáticos regulados en el Código Penal español, en particular en el artículo 264 ter CP. El fallo confirma que una bomba lógica (software malicioso incrustado en códigos de programación) constituye un programa informático concebido para la comisión de un delito, lo que justifica la aplicación del tipo agravado. La sentencia se apoya en la definición de dato informático contenida en instrumentos europeos como el Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest (2001) y la Directiva 2013/40/UE, que incluyen dentro de este concepto tanto los programas informáticos como cualquier representación de información en un sistema digital. De este modo, la decisión judicial refuerza la idea de que los ataques informáticos no solo afectan a datos como archivos o registros digitales, sino que también incluyen la manipulación de programas con capacidad de alterar sistemas de información.

Además, la sentencia establece que la manipulación de scripts y códigos fuente con intención de causar un daño informático debe ser considerada dentro del concepto de programa informático. El fallo refuta el argumento de la defensa de que la bomba lógica introducida por el acusado no constituía un software independiente, sino solo un código insertado dentro de un sistema ya existente. Al afirmar que un conjunto de líneas de código capaces de ejecutar funciones preprogramadas cumple con la definición de un programa informático, el Tribunal Supremo establece un criterio interpretativo que fortalece la lucha contra la cibercriminalidad, alineando la legislación penal española con los estándares internacionales. Esta interpretación amplía del concepto de dato informático amplía la cobertura legal para perseguir delitos informáticos más sofisticados, especialmente aquellos que emplean mecanismos automatizados para alterar sistemas sin necesidad de intervención directa del atacante en el momento del daño.

Another key aspect of the Order is the setting of the moment from which the investigation period is to be calculated. The Supreme Court has reaffirmed that the starting date corresponds to the initiation of preliminary proceedings by the investigating court, and not to the referral of the case to the Criminal Chamber. This interpretation reinforces the requirement for strict control over the duration of the investigation phase and obliges courts to act with greater diligence to prevent an out-of-time investigation from resulting in the destruction of evidence that is fundamental to the criminal proceedings in question.

Finally, the judgment has a significant procedural impact, as it sets a precedent regarding the effects of ill-founded extensions of time on an investigation. The Court stressed that the extension of deadlines must be express, justified and agreed upon within the initial deadline, otherwise, any subsequent proceedings will be declared null and void. This protects the right of those under investigation to a criminal investigation that respects fundamental principles such as legal certainty, the right of defence and due process. Furthermore, it clarifies that errors in procedural management can lead to the dismissal of cases even in cases of great public importance, which highlights the need for prosecutors' offices and courts to comply with strict procedural standards.

SUPREME COURT JUDGMENT 183/2024 of 29 February. Reporting Judge: The Honourable Ms Carmen Lamela Díaz. *Concerning: Expanding the concept of computer data and its impact on the prosecution of cybercrime.*

The analysis of Judgment 183/2024 of the Supreme Court concerning the concept of computer data is significant because it clarifies the scope of cybercrime regulated in the Spanish Criminal Code, in particular, Article 264 *ter*. The judgment confirms that a logic bomb (malicious software embedded in programming code) constitutes a computer program designed to commit a crime, which justifies its classification as an aggravated offence. The judgment relies on the definition of computer data contained in European legislative instruments such as the Budapest Convention on Cybercrime (2001) and Directive 2013/40/EU, which include within this concept both software and any representation of information in a digital system. Thus, the decision of the Court reinforces the idea that cyber-attacks do not only affect data such as files or digital records but also include the manipulation of programs capable of altering information systems.

Furthermore, the judgment states that the manipulation of scripts and source codes with the intention of causing computer damage must be considered within the concept of a computer program. The judgment refutes the defence argument that the logic bomb introduced by the defendant did not constitute stand-alone software, but rather was code inserted into an existing system. By confirming that a set of lines of code capable of executing pre-programmed functions meets the definition of a computer program, the Supreme Court has established an interpretative approach that strengthens the fight against cybercrime, bringing Spanish criminal law in line with international standards. This broad interpretation of the concept of computer data expands the legal coverage to prosecute more sophisticated cybercrimes, especially those that use automated mechanisms to alter systems without the need for direct intervention by the attacker at the time that the damage is caused.

4. Publicaciones de organismos oficiales

Consulta 3/2024, de 16 de mayo, sobre el concepto penal de patrimonio público del art. 433 *ter* CP

La Fiscalía General del Estado, mediante la Consulta 3/2024, se pronuncia sobre la interpretación de los delitos de malversación tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre. La cuestión controvertida gira en torno a si el objeto material del delito de malversación, conforme al tenor literal del artículo 433 *ter* CP, debe circunscribirse exclusivamente al concepto de patrimonio público definido desde la perspectiva del derecho administrativo. En particular, se plantea si la configuración del patrimonio público como el patrimonio propio de las Administraciones Públicas excluye de su ámbito los fondos, rentas o efectos pertenecientes a entidades del sector público institucional que no ostentan la condición formal de Administración Pública, tales como sociedades mercantiles de derecho privado dependientes del sector público, fundaciones públicas o universidades. Esta interpretación restringida podría limitar la aplicación del delito de malversación en supuestos de detracción patrimonial en estos entes, a pesar de su vinculación con el sector público.

Frente a esta posibilidad, la Fiscalía General del Estado sostiene que la definición contenida en el artículo 433 *ter* CP tiene una finalidad estrictamente penal y, por tanto, no debe interpretarse en términos exclusivamente administrativos. En consecuencia, el concepto de patrimonio público debe comprender no solo los bienes titularidad de las Administraciones Públicas en sentido estricto, sino también los recursos pertenecientes a las entidades que integran el sector público institucional, en la medida en que gestionan fondos públicos. De lo contrario, se generarían diversas disfuncionalidades jurídicas, tales como la ruptura de la coherencia sistemática entre la responsabilidad penal y contable, la incompatibilidad con la noción de autoridad y funcionario público establecida en el artículo 24 CP, y la existencia de ámbitos de protección diferenciados entre los delitos de malversación y fraude a la Administración (artículo 436 CP), lo que resultaría contrario a la finalidad protectora del derecho penal económico.

Si bien el Tribunal Supremo aún no ha abordado esta cuestión de manera exhaustiva, algunos de sus pronunciamientos apuntan en la misma dirección que la Consulta 3/2024. En particular, la Sentencia 1023/2022, de 26 de abril, reconoció la naturaleza pública de los caudales pertenecientes a una sociedad mixta, mientras que la Sentencia 1023/2022, de 26 de abril de 2023, extendió dicho análisis a otros entes del sector público, como universidades y fundaciones públicas. Estas resoluciones avalan la interpretación de que los bienes gestionados por entidades del sector público institucional deben ser considerados patrimonio público a efectos penales, permitiendo así la aplicación del delito de malversación a la sustracción indebida de estos recursos, en consonancia con la protección del interés general y la represión de conductas lesivas para la Hacienda Pública.

4. Publications by official bodies

Consultation 3/2024 of 16 May on the criminal concept of public assets in article 433 *ter* of the Criminal Code

In Consultation 3/2024, the State Attorney General's Office considered the interpretation of the offences of misappropriation following the reform introduced by Organic Law 14/2022, of 22 December. The issue in question revolved around whether the material object of the offence of misappropriation, according to the wording of Article 433 *ter* of the Criminal Code, should be limited exclusively to the concept of public assets defined from the perspective of administrative law. In particular, the question arose as to whether the definition of public assets as the public administration's own assets excludes from its scope the funds, income or effects belonging to institutional public sector entities that do not have the formal status of public administration, such as private law companies dependent on the public sector, public foundations or universities. This narrow interpretation could limit the application of the offence of misappropriation in cases of embezzlement in these entities, despite their link to the public sector.

Faced with this possibility, the State Attorney General's Office argued that the definition contained in Article 433 *ter* of the Criminal Code has a strictly criminal purpose and, therefore, should not be interpreted in exclusively administrative terms. Consequently, the concept of public assets should include not only the assets owned by public administrations in the strict sense but also the resources belonging to the entities that make up the institutional public sector, insofar as they manage public funds. Otherwise, various legal dysfunctions would arise, such as the breakdown of the systematic coherence between criminal and accounting liability, the incompatibility with the notion of authority and public official established in Article 24 of the Criminal Code, and the existence of differentiated areas of protection between the offences of embezzlement and fraud against the Administration (Article 436 of the Criminal Code), which would be contrary to the protective purpose of white collar crime law.

Although the Supreme Court has not yet addressed this issue exhaustively, some of its decisions follow the same reasoning as Consultation 3/2024. In particular, Judgment 1023/2022, of 26 April, recognised the public nature of funds belonging to a mixed company, while Judgment 1023/2022, of 26 April 2023, expanded this analysis to other public sector entities, such as universities and public foundations. These judgments support the interpretation that assets managed by institutional public sector entities should be considered public assets for criminal purposes, thus allowing the application of the offence of misappropriation to the embezzlement of these resources, in line with the protection of the general interest and the deterrence of conduct that is harmful to the Public Treasury.

5. Conocimiento Jurídico

5.1 Notas jurídicas enviadas a cliente

30/04/2024

Implementación y alcance de la Directiva (UE) 2024/1226 sobre la definición de delitos y sanciones en el contexto de las medidas restrictivas de la Unión Europea

Jorge Walser Boserman y Sara Bento

10/05/2024

Aprobación de la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituyen las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE

Jorge Walser Boserman, José del Saz, Coloma Vives y María Rodrigo

08/07/2024

Endurecimiento de medidas de la UE para prevenir la elusión de sanciones a Rusia

Jorge Walser

31/10/2024

Aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

Jorge Walser, Marina Cantos-Figuerola y Miriam Abajo

5.2 Artículos Doctrinales

18/11/2024 Cinco Días

La criminalización del incumplimiento de medidas restrictivas de la UE en España

Jorge Walser Boserman

5.3 Menciones en Prensa

24/06/2024 Confilegal

Pérez-Llorca analiza las principales tendencias en sanciones internacionales en su jornada 'Compliance al día'

Juan Palomino y Jorge Walser Boserman

24/09/2024 EuropaPress

Carmen Calvo defiende que el PSOE tiene que ser abolicionista: "No puede estar hablando de regular la prostitución"

Adriana de Buerba

5. Legal Knowledge

5.1 Legal Briefings sent to clients

30/04/2024

Implementation and scope of Directive (EU) 2024/1226 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures

Jorge Walser Boserman and Sara Bento

10/05/2024

Approval of Directive (EU) 2024/1203 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on the protection of the environment through criminal law and replacing Directives 2008/99/EC and 2009/123/EC

Jorge Walser Boserman, José del Saz, Coloma Vives and María Rodrigo

08/07/2024

Tougher EU measures to prevent the circumvention of sanctions against Russia

Jorge Walser

31/10/2024

Approval of the Statute of the Independent Authority for the Protection of Whistleblowers

Jorge Walser, Marina Cantos-Figuerola and Miriam Abajo

5.2 Academic Articles

18/11/2024 Cinco Días

The criminalisation of non-compliance with EU restrictive measures in Spain

Jorge Walser Boserman

5.3 In the Press

24/06/2024 Confilegal

Pérez-Llorca analyses the main trends in international sanctions at its "Compliance Law Update" session

Juan Palomino and Jorge Walser Boserman

24/09/2024 EuropaPress

Carmen Calvo argues that the PSOE has to be abolitionist: "You can't be talking about regulating prostitution".

Adriana de Buerba

25/09/2024 Le Courier d'Espagne

Carmen Calvo: un livre dans une perspective d'égalité des sexes

Adriana de Buerba

5.4 Libros

11/11/2024 Aranzadi

Aproximación Jurídica al Tercer Sector

Juan Palomino y Guillermo Meilán, coautores del Capítulo "Compliance penal y prevención de blanqueo de capitales en el tercer sector"

25/09/2024 Le Courier d'Espagne

Carmen Calvo: un livre dans une perspective d'égalité des sexes

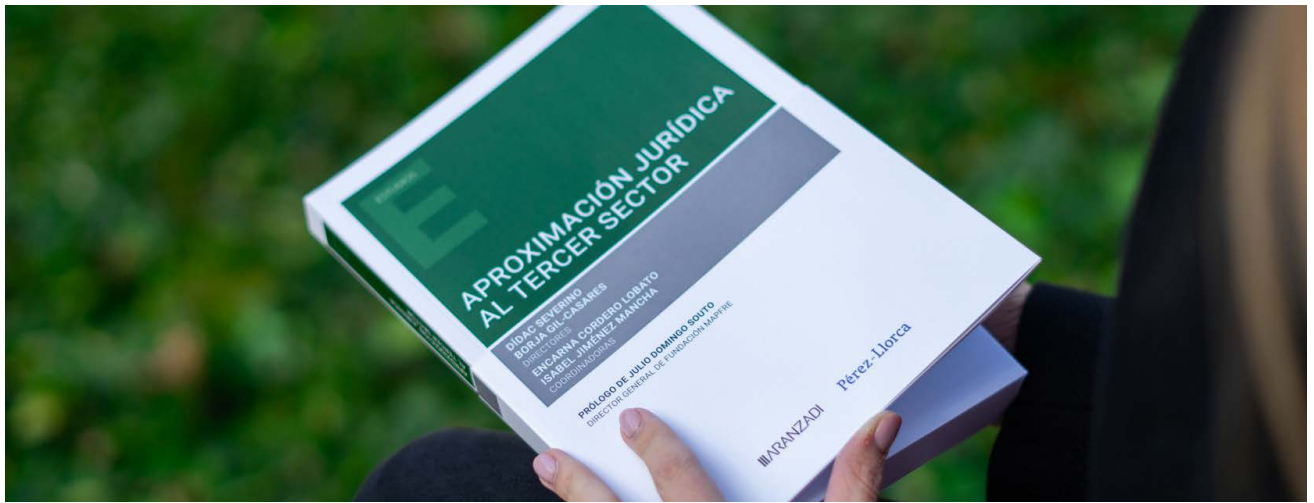
Adriana de Buerba

5.4 Books

11/11/2024 Aranzadi

"A Legal Approach to the Third Sector"

Juan Palomino and Guillermo Meilán, co-authors of the chapter "Criminal Compliance and Anti-Money Laundering in the non-profit sector"



5.5 Actividad docente

Universidad Pontificia de Comillas

Juan Palomino ha colaborado impartiendo la asignatura delitos contra la intelectual a través de Internet en el Máster Universitario en Propiedad Intelectual.

ISDE

Juan Palomino ha colaborado impartiendo la asignatura Obligaciones de los abogados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Juan Palomino también ha participado en el Máster de acceso a la abogacía impartiendo la asignatura de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Universidad Carlos III de Madrid

Guillermo Meilán ha participado impartiendo clases en el Master de Derecho de las Telecomunicaciones.

URJC

Adriana de Buerba y Mario H. Maldonado han colaborado con la URJC impartiendo clases en el Máster de Derecho Penal Económico.

5.5 Academic Activities

Universidad Pontificia Comillas

Juan Palomino taught the subject "Crimes against Intellectual Property through the Internet" for the Master's Degree in Intellectual Property.

ISDE

Juan Palomino taught the subject "Lawyers' Obligations in the Prevention of Money Laundering".

Juan Palomino has also participated in the Master's Degree for Access to the Legal Profession, teaching the subject of Prevention of Money Laundering.

Universidad Carlos III de Madrid

Guillermo Meilán taught classes for the Master's Degree in Telecommunications Law.

URJC

Adriana de Buerba and Mario H. Maldonado have collaborated with the URJC by teaching the Master's Degree in White Collar Crime Law.

5.6 Eventos

01/02/2024

Adriana de Buerba moderó la Conferencia de la International Bar Association “**From fake arbitrations to awards based on fraudulent evidence**” dentro de la conferencia “When arbitration meets crime”.

07/02/2024

“**El Compliance Penal como elemento esencial de las sociedades**”. En el marco de nuestro ciclo de sesiones formativas, Juan Palomino y Jorge Walser abordaron los principales fallos jurisprudenciales de 2023 en responsabilidad penal de las personas jurídicas y las lecciones aprendidas. Además, debatieron sobre la evolución del rol del Compliance Officer, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Protección al Informante. Una sesión clave para entender los nuevos desafíos normativos y fortalecer la cultura de cumplimiento en las organizaciones.



14/03/2024

Adriana de Buerba moderó la Mesa redonda “**El órgano de prevención de blanqueo de la abogacía española (OPBA)**” organizado por el Consejo General de la Abogacía Española.

15/03/2024

Juan Palomino fue ponente de la Mesa redonda sobre “**El blanqueo de capitales**” organizado por la Escuela de Práctica Jurídica.

20/03/2024

Adriana de Buerba fue ponente en la conferencia celebrada en Estambul “**Calming the Storm: GC’s Changing Role in Crisis Management**” organizada MOROGLU ARSEVEN en colaboración con The Legal 500. La sesión reunió a asesores jurídicos de empresas multinacionales y conglomerados locales para analizar el papel estratégico del General Counsel (GC) en la gestión de crisis y riesgos corporativos. Durante la discusión, los ponentes abordaron escenarios complejos en los que la preparación operativa, la continuidad del negocio, las investigaciones regulatorias y judiciales, los procedimientos legales y las obligaciones contractuales convergen, afectando directamente a la reputación corporativa. A través de casos reales y un enfoque práctico, se analizaron las mejores estrategias para anticiparse y gestionar situaciones de crisis, subrayando la importancia del asesoramiento jurídico en la toma de decisiones estratégicas en entornos de alta incertidumbre.

5.6 Events

01/02/2024

Adriana de Buerba moderated the International Bar Association Conference “**From fake arbitrations to awards based on fraudulent evidence**” within the conference “When arbitration meets crime”.

07/02/2024

“**Criminal Compliance as an essential element of companies**.” As part of our cycle of training sessions, Juan Palomino and Jorge Walser addressed the most important case law from 2023 on the criminal liability of legal persons and the lessons learned. They also discussed the evolving role of the Compliance Officer, especially after the entry into force of the Whistleblower Protection Act. A key session to understand the new regulatory challenges and strengthen the culture of compliance in organisations.



14/03/2024

Adriana de Buerba moderated the round table “**The Spanish Lawyers’ Anti-Money Laundering Body (OPBA)**” organised by the General Council of Spanish Lawyers.

15/03/2024

Juan Palomino was a speaker at the round table on “**Money laundering**” organised by the Escuela de Práctica Jurídica.

20/03/2024

Adriana de Buerba was a speaker at the Istanbul conference “**Calming the Storm: GC’s Changing Role in Crisis Management**” organised by MOROGLU ARSEVEN in collaboration with The Legal 500. The session brought together legal advisers from multinational companies and local conglomerates to discuss the strategic role of General Counsels (GCs) in crisis and corporate risk management. During the discussion, speakers addressed complex scenarios in which operational readiness, business continuity, regulatory and judicial investigations, legal proceedings and contractual obligations converge, directly affecting corporate reputation. Using real cases and a practical approach, the best strategies for anticipating and managing crisis situations were analysed, highlighting the importance of legal advice in strategic decision-making in a highly uncertain environment.

27/04/2024

Adriana de Buerba fue ponente en la conferencia **“How fair and impartial is the Spanish criminal justice system?”** organizada por la International Academy of Financial Crime Litigators.

27/04/2024

Adriana de Buerba was a speaker at the conference **“How fair and impartial is the Spanish criminal justice system?”** organised by the International Academy of Financial Crime Litigators.

09/05/2024

Adriana de Buerba fue ponente en la conferencia **“Subsidies fraud post-Covid-19”** organizada por la International Bar Association dentro de la 26ª Conferencia Anual sobre Crimen Transnacional. Adriana de Buerba participó como ponente en un panel dedicado al fraude en subvenciones tras la pandemia de Covid-19, donde se analizaron los riesgos y desafíos que surgieron con la concesión de ayudas públicas en un contexto de emergencia. Se debatió cómo la flexibilización de los controles y los procedimientos de adjudicación acelerados facilitaron la concesión de fondos a empresas sin la supervisión habitual, lo que ha derivado en un aumento de investigaciones por fraude y corrupción a nivel internacional. Durante la sesión, se examinaron casos reales de distintas jurisdicciones, las tendencias emergentes en la detección y persecución de estos delitos, así como las estrategias clave para prevenir y combatir las prácticas fraudulentas en la gestión de fondos públicos.

09/05/2024

Adriana de Buerba was a speaker at the conference **“Subsidies fraud post-COVID-19”** organised by the International Bar Association as part of the 26th Annual Conference on Transnational Crime. Adriana de Buerba participated as a speaker in a panel on subsidy fraud in the aftermath of the COVID-19 pandemic, where the risks and challenges that arose with the granting of public subsidies in an emergency context were analysed. The panel discussed how looser controls and accelerated award procedures facilitated the granting of funds to companies without the usual oversight, which has led to an increase in fraud and corruption investigations at the international level. The session examined real cases from different jurisdictions, emerging trends in the detection and prosecution of these crimes, as well as key strategies to prevent and combat fraudulent practices in the management of public funds.

13/06/2024

“Pérez-Llorca analiza las principales tendencias en sanciones internacionales en su jornada ‘Compliance al día’”. Pérez-Llorca celebró una nueva sesión de ‘Compliance al día’, centrada en las tendencias emergentes en sanciones internacionales y los retos que plantea su cumplimiento para las empresas. Se analizó el impacto del actual marco geopolítico en la normativa europea y la dificultad de su aplicación debido a las diferencias entre los regímenes de sanciones de la UE, EE.UU. y Reino Unido. También se abordó la reciente Directiva (UE) 2024/1226, que entrará en vigor en mayo de 2025, introduciendo sanciones penales por la vulneración de medidas restrictivas y exigiendo un enfoque más riguroso en su cumplimiento. La sesión también profundizó en las implicaciones de esta normativa para el Código Penal español, en particular la tipificación de la elusión de sanciones como delito y la posible ampliación de la responsabilidad empresarial. Además, se discutieron estrategias de compliance preventivo y reactivo, incluyendo la evaluación de riesgos, la implementación de controles internos y la gestión de crisis ante eventuales incumplimientos. Se destacó la importancia de adoptar medidas adaptadas a cada sector y negocio para mitigar riesgos legales y reputacionales en un entorno normativo en constante evolución.

13/06/2024

“Pérez-Llorca analyses the main trends in international sanctions at its ‘Compliance Law Update’ session”. Pérez-Llorca held a new “Compliance Law Update” session, focusing on emerging trends in international sanctions and the challenges for companies to comply with them. The impact of the current geopolitical framework on European regulation and the difficulty of implementation due to the differences between the EU, US and UK sanctions regimes were analysed. The recent Directive (EU) 2024/1226, which will enter into force in May 2025, and which introduces criminal sanctions for breaches of restrictive measures and requires a more rigorous approach to compliance, was also discussed. The session also delved into the implications of this legislation for the Spanish Criminal Code, in particular, the criminalisation of the circumvention of sanctions and the possible extension of corporate liability. In addition, preventive and reactive compliance strategies were discussed, including risk assessment, the implementation of internal controls and crisis management in the event of non-compliance. The importance of adopting measures tailored to each sector and business to mitigate legal and reputational risks in a constantly evolving regulatory environment was highlighted.



26/06/2024

Jorge Walser impartió la ponencia “**Compliance en el tercer sector: cumplimiento normativo y mejores prácticas**” como parte del programa pro bono “Construyendo Juntos”, una iniciativa liderada por Iberdrola en colaboración con 14 despachos de abogados de prestigio. Dicho programa se creó con la finalidad de ofrecer asesoramiento jurídico de alta calidad a entidades sin ánimo de lucro. La ponencia se centró en dos aspectos críticos para las fundaciones y asociaciones: la normativa de prevención de blanqueo de capitales, y las implicaciones de la reciente normativa sobre canales de denuncia. Su intervención proporcionó orientación práctica para que estas organizaciones puedan adaptar eficazmente sus estructuras de cumplimiento a estos requisitos legales específicos.

26/06/2024

Jorge Walser gave the talk “**Compliance in the third sector: regulatory compliance and best practices**” as part of the pro bono programme “Building Together”, an initiative led by Iberdrola in collaboration with 14 prestigious law firms. This programme was created with the aim of providing high-quality legal advice to non-profit organisations. The presentation focused on two critical issues for foundations and associations: anti-money laundering rules, and the implications of recent rules on whistleblowing channels. His talk provided practical guidance for organisations to effectively adapt their compliance structures to these specific legal requirements.



18/09/2024

Adriana de Buerba fue ponente en la conferencia “**Workplace and employment offenses**” organizado por la International Bar Association en Ciudad de México.

18/09/2024

Adriana de Buerba was a speaker at the conference “**Workplace and employment offenses**” organised by the International Bar Association in Mexico City.

03/10/2024

Adriana de Buerba fue ponente en la sesión de FIDE “**El delito de corrupción entre particulares en el ámbito de los negocios**”. En esta sesión se analizó la evolución normativa de esta figura en el ordenamiento jurídico penal español desde su incorporación en 2010 y las sucesivas reformas de 2015 y 2019. Durante el debate, se abordó el papel del Consejo de Europa en la presión para reforzar el marco sancionador y se discutió la percepción de que esta conducta no se castiga en España, a pesar de la existencia de resoluciones judiciales relevantes. Además, se profundizó en el estado actual de la jurisprudencia y en los retos pendientes en la lucha contra este tipo de prácticas ilícitas, subrayando su impacto en la confianza y credibilidad del sistema económico. La sesión destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección, así como de fomentar una mayor conciencia empresarial sobre la importancia de combatir la corrupción en el ámbito privado.

03/10/2014

Adriana de Buerba was a speaker at the FIDE session “**The crime of corruption between private individuals in the field of business**”. This session analysed the regulatory evolution of this figure since its incorporation into the Spanish criminal legal system in 2010 and the successive reforms in 2015 and 2019. During the debate, the role of the Council of Europe in applying pressure to strengthen the sanctioning framework was considered, and the perception that this conduct is not punished in Spain, despite the existence of relevant court rulings, was discussed. In addition, the current case law and the remaining challenges in the fight against these types of illicit practices were discussed in depth, and in particular their impact on the confidence and credibility of the economic system. The session highlighted the need to strengthen prevention and detection mechanisms, as well as to promote greater business awareness of the importance of combating corruption in the private sphere.

28/11/2024

Juan Palomino formó parte de los panelistas que del evento que organizó IE Business School “**International Criminal Law: White-collar crime**”.

28/11/2024

Juan Palomino was one of the panellists at the IE Business School event “**International Criminal Law: White-collar crime**”.

6. Reconocimientos

6.1 Despacho

Chambers & Partners Europe 2024

- » Dispute Resolution: Corporate Crime - **Band 2**
- » Corporate Compliance - **Band 2**

6.2 Abogados

Chambers & Partners Europe 2024

- » Dispute Resolution: Corporate Crime: Adriana de Buerba - **Band 1**
- » Corporate Compliance: Adriana de Buerba - **Band 1**
- » Dispute Resolution: Corporate Crime: Juan Palomino - **Band 3**
- » Corporate Compliance: Juan Palomino - **Band 3**

Legal 500 EMEA 2024

- » Adriana de Buerba - Leading Partner
- » Juan Palomino - Next Generation Partner

Best Lawyers 2024

- » Adriana de Buerba - Criminal Defense, Arbitration and Mediation, Corporate Governance and Compliance Practice
- » Juan Palomino - Criminal Defense, Corporate Governance and Compliance Practice
- » Guillermo Meilán - Criminal Defense
- » Jorge Walser - Criminal Defense

6. Recognition

6.1 Firm

Chambers & Partners Europe 2024

- » Dispute Resolution: Corporate Crime - **Band 2**
- » Corporate Compliance - **Band 2**

6.2 Lawyers

Chambers & Partners Europe 2024

- » Dispute Resolution: Corporate Crime: Adriana de Buerba - **Band 1**
- » Corporate Compliance: Adriana de Buerba - **Band 1**
- » Dispute Resolution: Corporate Crime: Juan Palomino - **Band 3**
- » Corporate Compliance: Juan Palomino - **Band 3**

Legal 500 EMEA 2024

- » Adriana de Buerba - Leading Partner
- » Juan Palomino - Next Generation Partner

Best Lawyers 2024

- » Adriana de Buerba - Criminal Defence, Arbitration and Mediation, Corporate Governance and Compliance Practice.
- » Juan Palomino - Criminal Defence, Corporate Governance and Compliance Practice.
- » Guillermo Meilán - Criminal Defence.
- » Jorge Walser - Criminal Defence.

7. Nuestro equipo

El equipo de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca está formado por abogados especializados y con experiencia multidisciplinar, que asesoran de manera personalizada a cada cliente. Los abogados del equipo de Penal Económico cuentan con un amplio expertise en diversas áreas del Derecho Penal Económico y, con el apoyo del resto de especialistas del Despacho, logran alcanzar para cada cliente una solución jurídica global y ad hoc al supuesto de hecho concreto. El asesoramiento del equipo pone especial énfasis en las siguientes áreas:

- » **Procedimientos penales por delitos económicos:** El equipo de Penal Económico e Investigaciones está particularmente especializado en investigaciones penales complejas con componentes transnacionales por delito societario, fraude fiscal, defraudaciones o blanqueo de capitales que puedan implicar la responsabilidad penal de sociedades mercantiles u otro tipo de personas jurídicas. Asimismo, el equipo cuenta con una amplia experiencia en investigaciones relacionadas con ciberdelincuencia, actuando en representación de personas jurídicas que han sufrido episodios de esta naturaleza.
- » **Experiencia en delitos contra los derechos de los trabajadores:** Nuestro equipo de Penal Económico e Investigaciones cuenta con una altísima especialización en la llevanza de procedimientos penales por delitos contra los derechos de los trabajadores, ofreciendo una defensa técnica y estratégica tanto a empresas como a sus directivos. Asimismo, brindamos un asesoramiento integral, tanto en la fase prejudicial como en la litigiosa, en la defensa de administradores y empleados vinculados al servicio de Prevención de Riesgos Laborales, garantizando un enfoque preventivo y reactivo ante eventuales responsabilidades penales derivadas del incumplimiento normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- » **Investigaciones internas:** El equipo de Penal Económico e Investigaciones se especializa en procedimientos de investigación interna y ofrece asesoramiento a empresas de todos los tamaños para evaluar su exposición a posibles irregularidades, así como para implementar acciones correctivas. El equipo a menudo se coordina con despachos de abogados extranjeros para llevar a cabo investigaciones internas que afectan a varias jurisdicciones y coordina acciones investigativas que afectan a los recursos informáticos corporativos.
- » **Corporate Compliance y asesoramiento en el marco de operaciones de M&A:** Nuestro equipo de Penal Económico e Investigaciones asesora a empresas de todos los tamaños en la creación o mejora de sus procedimientos internos para la prevención y detección temprana de posibles irregularidades penales, y en la implementación de procedimientos de investigación corporativa interna. Dentro de este ámbito del derecho, el equipo asesora a empresas extranjeras que necesitan adaptar sus procedimientos internos para cumplir con la normativa española con el fin de operar en España. El equipo también se especializa en evaluaciones de riesgo penal en el marco de transacciones corporativas.

7. Our Team

Pérez-Llorca's White Collar Crime and Investigations team is made up of specialised lawyers with multidisciplinary experience who deliver personalised advice to every client. The White Collar Crime and Investigations lawyers have wide-ranging expertise in various areas of white collar criminal law and, with the support of other specialists at Pérez-Llorca, are able to find comprehensive legal solutions for our clients, tailored to each individual case. Our team's advice specifically focuses on the following areas:

- » **Criminal proceedings for white collar crimes:** Our White Collar Crime and Investigations team specialises in complex criminal investigations with transnational components relating to corporate crime, tax fraud and money laundering which could give rise to the criminal liability of corporations or other legal entities. Our team also has considerable experience in all kinds of investigations relating to cybercrime, and acts on behalf of legal entities that have been affected by this type of crime.
- » **Experience in offences against workers' rights:** Our White Collar Crime and Investigations team specialises in handling criminal proceedings for offences against workers' rights, offering a technical and strategic defence to both companies and directors. We also provide comprehensive advice, both in the pre-trial and litigation phases, in the defence of directors and employees linked to the occupational risk prevention service, guaranteeing a preventive and reactive approach to possible criminal liability arising from non-compliance with occupational health and safety regulations.
- » **Internal investigations:** The White Collar Crime and Investigations team specialises in internal investigation procedures and advises companies of all sizes to assess their exposure to potential irregularities, as well as to implement corrective actions. The team often coordinates with foreign law firms to conduct internal investigations affecting various jurisdictions and coordinates investigative actions affecting corporate IT resources.
- » **Corporate compliance and legal advice within the framework of M&A transactions:** Our White Collar Crime and Investigations team advises companies of all sizes on creating or improving their internal procedures for the prevention and early detection of potential criminal irregularities, and on the implementation of internal corporate investigation procedures. Within this area of law, the team advises foreign companies that need to adapt their internal procedures to comply with Spanish regulations in order to operate in Spain. The team also specialises in criminal risk assessments within the framework of corporate transactions.



Adriana de Buerba
Socia/Partner

adebuerba@perezllorca.com
+34 91 423 67 29



Guillermo Meilán
Asociado/Lawyer

gmeilan@perezllorca.com
+34 91 423 245 4



Mario Maldonado
Asociado/Lawyer

mmaldonado@perezllorca.com
+34 91 389 01 12



Noelia Veiga
Asociada/Lawyer

nveiga@perezllorca.com
+34 91 389 01 74



Juan Palomino
Socio/Partner

jpalomino@perezllorca.com
+34 91 423 20 87



Jorge Walser Boserman
Asociado/Lawyer

jwalser@perezllorca.com
+34 91 432 51 29



Miriam Abajo
Asociada/Lawyer

mabajo@perezllorca.com
+34 91 423 66 50



Marina Cantos-Figuerola
Asociada/Lawyer

mcantosfiguerola@perezllorca.com
+34 91 410 09 93



www.perezllorca.com

BCN | BRU | CDMX | LIS | LON | MAD | MTY | NYC | SGP